

Santiago, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

I.- Causa Rol N° 638-2024.

Primero: Que, comparece don Sebastián Ramírez Montalva, abogado, en representación de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, interponiendo acción constitucional de amparo en favor de los 44 internos que luego detalla, quienes se encuentran actualmente bajo su custodia, en contravención a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 518 y el artículo 457 del Código Procesal Penal, afectando la seguridad individual de los amparados.

Los internos en cuyo favor comparece, corresponden a:

Internados en el C.D.P. Santiago Sur:

1) Camilo Andrés Gamboa Contreras, en causa RIT N° 3281-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Melipilla;

2) Pablo Andrés Vega Cárdenas, en causa RIT N° 1346-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto;

3) Patricio Andrés León Carrasco, en causa RIT N° 1485-2023, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago;

4) Daniel Edmundo Fernández Pradena, en causa RIT N° 1265-2023, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago; y

5) Jeremía Andrés Veliz Pastén, en causa RIT N° 3883-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Colina.

Internados en el C.D.P. Santiago Uno:

6) Gabriel Ernesto Garrido Vargas, en causa RIT N° 2625-2023, seguida ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago;

7) Oscar Glenn Cortés Bravo, en causa RIT N° 1835-2023, seguida ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago;

8) Sebastián Nicolás Blásquez González, en causa RIT N° 5576-2022, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago;

9) Alex Jordano Jiménez Cerna, en causa RIT N° 969-2023, seguida ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago;

10) Carlos Andrés Encina Peña, en causa RIT N° 3090-2023, seguida ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago;

11) Héctor Francisco Parra Fuentes, en causa RIT N° 3868-2023, seguida ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago;



12) Andrés Ignacio Morales Jorquera, en causa RIT N° 482-2022, seguida ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago;

13) Luis Roberto Aguilar Garrido, en causa RIT N° 2563-2021, seguida ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago;

14) Alexis Jesús Cano Salazar, en causa RIT N° 5494-2023, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago;

15) Benjamín Esteban Bordillo Catrimán, en causa RIT N° 3891-2021, seguida ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago;

16) Giorgio Paolo Palavecino Ramos, en causa RIT N° 6007-2002, seguida ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo;

17) Sergio Domingo Ahumada Valdenegro, en causa RIT N° 565-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Melipilla;

18) Joel Armando Martínez Borne, en causa RIT N° 7567-2022, seguida ante el Juzgado de Garantía de San Antonio;

19) Ramón Segundo Rodríguez Alarcón, en causa RIT N° 1879-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto;

20) Rodrigo Eduardo Pizarro Armijo, en causa RIT N° 1367-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Melipilla;

21) Alex Aaron Valenzuela Fuentes, en causa RIT N° 1314-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Talagante;

22) Raúl Patricio Morrison Ibáñez, en causa RIT N° 2232-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Melipilla;

23) Eduardo Alejandro Pérez Armijo, en causa RIT N° 5304-2022, seguida ante el Juzgado de Garantía de Talagante;

24) Paúl Brayan Alarcón Curallán, en causa RIT N° 3525-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Melipilla;

25) Franco Giovanni Savrón Venegas, en causa RIT N° 7566-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto;

26) Brandon Esteban Gallardo Albornoz, en causa RIT N° 1278-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Curacaví;

27) Alfredo Arnoldo Urrutia Díaz, en causa RIT N° 10.602-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto;

28) Roland Baudilio Caniullán Rubilar, en causa RIT N° 745-2023, seguida ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago;



29) Francisco Javier Vargas Gutiérrez, en causa RIT N° 6960-2023, seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago;

30) Josué Baltazar González González, en causa RIT N° 6387-2023, seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago;

31) Andrés Mauricio Palomino Ibáñez, en causa RIT N° 5180-2023, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago;

32) Mauricio de Souza Lima, en causa RIT N° 9195-2023, seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago;

33) Faut Andrés Salas Seydewitz, en causa RIT N° 9387-2023, seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago;

34) Julio Vicente Velásquez Espinoza, en causa RIT N° 6283-2023, seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago;

35) Michael Andrés Carvacho Cordero, en causa RIT N° 6864-2023, seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago;

36) José Matías Lizama Vásquez, en causa RIT N° 11.543-2023, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago;

37) Juan Jesús Carrasco Madrid, en causa RIT N° 804-2023, seguida ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago;

38) Luciano Patricio Matamala Pérez, en causa RIT N° 3845-2023, seguida ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago;

39) Nelson Jeremías Muñoz Fuentes, en causa RIT N° 6273-2021, seguida ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago;

40) Víctor Hernán Peña Silva, en causa RIT N° 473-2023, seguida ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago;

41) Reidin León Castañeda Marchant, en causa RIT N° 2282-2022, seguida ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago;

42) Eduardo Andrés Namucura Namucura, en causa RIT N° 4996-2022, seguida ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago;

43) Sergio Michel Jeldres Lagos, en causa RIT N° 7812-2023, seguida ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago; y

44) Isaac Guellermo Díaz Castellana, en causa RIT N° 4517-2023, seguida ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

Explica que todos los imputados están privados de libertad por orden de los tribunales indicados, estando bajo la hipótesis prevista en el artículo



458 del Código Procesal Penal, suponiendo un evidente peligro para ellos, el resto de la población penal y de los propios funcionarios de Gendarmería.

Agrega que, además, mantener bajo su custodia a esas personas, que están en una condición distinta, impide a Gendarmería practicar una adecuada segmentación y segregación de la población penal, limitando las posibilidades de seguridad y control, en tanto mantener estos internos provisionales fuerza a ese Servicio a dar cumplimiento a las órdenes de tribunales, bajo pena de ser sancionado por su incumplimiento, afectando la Administración Penitenciaria, quien con fundamento técnico debe cautelar las garantías persona que está bajo una medida de seguridad y no bajo la condición procesal de imputado.

Destaca que normativamente el régimen penitenciario de sus unidades penales está destinado a personas bajo la condición de detenidos, imputados o condenados, por lo que malamente puede albergar en sus dependencias a una persona cuyo proceso penal está suspendido y, cesó, por tanto, su calidad de imputado en una causa.

Entiende que una persona que mantiene la medida de seguridad de internación provisional, en un contexto penitenciario, constituye por antonomasia una grave vulneración de las garantías constitucionales que cautela esta acción de amparo, es decir, su seguridad personal, existiendo en caso de una descompensación de su estado mental en ese contexto un riesgo para su integridad física y, en consecuencia, pone en riesgo al resto de la población penal que Gendarmería sí está llamado a cautelar; unido a que no cuenta con una infraestructura especializada y no están formados para custodiar, contener y tratar con personas en esta situación.

En el mismo sentido, no administra unidades de atención de salud, considerando que todas las áreas de salud ambulatorias de las unidades penales no pueden ni nunca podrán ser consideradas establecimientos de salud, en atención al decreto de destinación que fija el dominio público del bien donde se ubican, no siendo asimilables a un hospital público o una entidad especializada de salud, contraviniendo así su permanencia en recintos penitenciarios lo dispuesto en el artículo 457 del Código Procesal Penal.

Señala que esa entidad está mandatada por el legislador para atender, vigilar y reinserir socialmente a las personas privadas de libertad,



ya sea por una medida cautelar o por cumplimiento de condena, no siendo la mandatada para la custodia y resguardo de quienes estén bajo la medida de seguridad de internación provisional, que precisan de atenciones médicas especiales y, que por normativa legal expresa, no pueden permanecer en un establecimiento penitenciario.

Da cuenta que la acción se funda, además, en el riesgo presente y probable para la seguridad individual de los amparados, al punto que ese Servicio ha debido lamentar el deceso de Gustavo González Arco, quien permanecía en el C.D.P. Santiago Uno, por orden del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N° 5078-2023; y de Alberto Jose de Nicolo Rivero, quien permanecía en el C.D.P. Santiago Sur, por orden del 4° Juzgado de Garantía de esta ciudad, en causa RIT N° 9578-2023.

Cita el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el artículo 457 del Código Procesal Penal, norma que expresamente prohíbe que las medidas de seguridad se lleven a cabo en un establecimiento penitenciario, debiendo ser la persona trasladada a una institución especializada para realizar la custodia, tratamiento o la internación o, en caso de que no lo hubiere, se deberá habilitar un recinto especial en el hospital público más cercano.

Argumenta de lo recién indicado, lo dispuesto en su Ley Orgánica y en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que en ningún caso se contempla la custodia, resguardo y tratamiento de las personas bajo la medida de internación provisional, limitándose su deber a las personas detenidas, sujetas a prisión preventiva y condenados, no siendo la llamada a custodiar a personas en la situación de los amparados. No obstante, es la insistencia infundada de los tribunales de base lo que expone a todos los amparados a una situación de peligro presente y probable, obligando a Gendarmería a excederse de sus funciones, exponiéndolo a responsabilidades administrativas y penales, comprometiendo la responsabilidad civil del Estado.

De la norma citada del Código Procesal Penal, observa que esa misión le corresponde a los establecimientos de salud pertenecientes a la Red Pública de Salud, pertenecientes a los respectivos Servicios de Salud dependientes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.



Finaliza solicitando que se restablezca el imperio del derecho, ordenando el traslado de los amparados a una institución pública especializada, o al hospital que esta Corte determine; o que se ordene fijar audiencia a la brevedad, en cada caso, para que se cumpla derechamente lo ordenado por el Código Procesal Penal en esta situación.

Segundo: Que, informó el Juzgado de Garantía de Puente Alto, señalando que la cuestión planteada es un problema país de salud pública.

Indica que no obstante los intervinientes aboguen por dar la debida protección a las víctimas y que los imputados ingresen en internación provisional en un establecimiento de salud mental con infraestructura adecuada, esto no ocurre oportunamente y escapa a sus posibilidades, por cuanto las listas de espera en el Hospital Horwitz Barak son extensas y, por ende, decretada por el Tribunal la orden de ingreso, implica necesariamente que los imputados deban pasar tiempos prolongados en secciones de los recintos penitenciarios sin la infraestructura adecuada, y en el mejor de los casos, permanecen en espera de un cupo en dependencias del Hospital Penitenciario.

Agrega que mientras se encuentre vigente un procedimiento, puede decretarse la internación provisional dispuesta en el artículo 464 del Código Procesal Penal, que permite decretar esa medida cautelar en un establecimiento asistencial, escapando de sus recursos la oportuna internación en hospitales públicos, por falta de cupos.

Refuta la afirmación de Gendarmería de que los centros de salud penitenciarios no sean hospitales públicos, puesto que tratándose de la internación provisional, la Ley únicamente alude a un establecimiento asistencial, pudiendo cumplirse en un recinto de esa naturaleza.

Al pronunciarse respecto de los imputados que mantienen causas vigentes en ese Tribunal, respecto del imputado Pablo Andrés Vega Cárdenas, indica que el 15 de enero de 2024 se informó por el Hospital Horwitz que está en lista de espera con el N° 27 para ser ingresado a la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) de ese centro, habiéndose ordenado el 3 de julio de 2023 su ingreso al Hospital Penitenciario mientras se genere un cupo.

En relación al imputado Ramón Segundo Rodríguez Alarcón, ya se encuentra en la UEPI del Hospital Horwitz desde el 28 de febrero de 2024.



En el caso del imputado Franco Giovanni Savrón Venegas, se ordenó su ingreso al Hospital Penitenciario el 2 de noviembre de 2023, a la espera de un cupo, y el 8 de marzo de 2024 se informó por el Hospital Horwitz que está en lista de espera con el N° 31 para su ingreso a la UEPI.

Por su parte, el imputado Alfredo Arnoldo Urrutia Díaz, se ordenó su ingreso el 8 de diciembre de 2023 al Hospital Penitenciario a la espera de un cupo; y el 4 de enero de 2024 se ordenó su traslado a la Clínica Privada del Carmen San Juan de Dios, cuyos gastos están a cargo de su familia.

Destaca, finalmente, que todas las resoluciones que ordenan la internación provisional de los imputados y su mantención han sido dictadas por un Tribunal competente, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, con observancia de las formas procesales y con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del imputado.

Tercero: Que, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, dio cuenta respecto del imputado Julio Vicente Velásquez Espinosa, que el 28 de noviembre de 2023, se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por la de internación provisional, ordenando su ingreso al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Luego, el 25 de enero de 2024, por decisión de la Corte Suprema se revocó la medida cautelar, decretándose la de arresto domiciliario total, dándose orden de libertad el 26 de enero de 2024, lo que fue recibido por el C.D.P. Santiago Uno, no estando a la fecha privado de libertad en algún centro del recurrente ni a la espera de ingresar al Hospital Horwitz.

Cuarto: Que, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, dio cuenta respecto del imputado Víctor Hernán Peña Silva, que éste se encuentra en libertad desde el 29 de febrero del presente año.

Por su parte, la causa seguida en contra de Reidin Castañeda Marchant se encuentra desde el 15 de noviembre de 2023 ante el 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Quinto: Que, informando el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, hace presente en relación al imputado Juan Carrasco Madrid, que en audiencia de 8 de septiembre de 2023 se decretó la suspensión del procedimiento, de conformidad con el artículo 458 del Código Procesal Penal, sustituyendo la medida cautelar de prisión preventiva por la de internación provisional.



Refiere que el 26 de noviembre de 2023 se recibió informe del Hospital Horwitz, que adjunta y en el que se indica que no corresponde a un caso de enajenación mental, estando fijada audiencia de revisión de la prisión preventiva para el 20 de marzo de este año.

Sexto: Que, el 1° Juzgado de Garantía de esta ciudad, indica que los hechos expuestos por el recurrente son verídicos, tal como los Jueces de Garantía de Santiago han dejado constancia en las actas de visitas semanales de cárcel, remitidas a esta Corte de Apelaciones los últimos quince años.

Indica que en la visita del C.D.P. Santiago Uno, de 1 de marzo de 2024, se describe pormenorizadamente la situación de los imputados en internación provisional en ese recinto penal.

Agrega que no obstante los Juzgados de Garantía de Santiago ordenan la internación provisional de los imputados en el Hospital Horwitz, con arreglo a los artículos 457, 458 y 464 del Código Procesal Penal, éste se niega a recibirlos por escasez de recursos, carencia de instalaciones, camas y personal, por lo que en su inmensa mayoría son derivados al C.D.P. Santiago Uno, lugar donde tampoco se acatan las órdenes de mantenerlos bajo supervisión sanitaria en el Hospital ASA o en algún anexo habilitado, habiéndose constatado que la mayoría de los imputados permanecían en los distintos módulos del establecimiento, junto a la población general, con el consiguiente riesgo para su vida e integridad física, dada la vulnerabilidad física y psíquica de los pacientes.

Añade que se verificó que dos imputados, con serios problemas de salud mental, fallecieron en las últimas semanas dentro de los recintos penales, a la espera de ser trasladados al Hospital Horwitz, cuya lista de espera supera los cien pacientes, pudiendo demorarse cerca de un año la evaluación médica.

Indica que esta situación ya había sido advertida y denunciada por ese mismo tribunal, en causa RIT N° 45-2013, a propósito de la muerte del imputado Robinson Nicolás García Morales, en internación provisional en el Hospital ASA de C.D.P. Santiago Uno, con fecha 11 de enero de 2013.

Hace presente que a pesar de las denuncias y participación en distintas instancias de coordinación interinstitucional, el Poder Ejecutivo, mediante los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud



Pública, en particular de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los Servicios de Salud Metropolitanos Norte, Oriente y Occidente, aún no se asignan los recursos que permitan separar a los pacientes de la población penal general, y entregarles el tratamiento médico requerido.

Respecto al imputado Héctor Francisco Parra Fuentes, en internación provisional en el Módulo N° 12 del C.D.P. Santiago Uno, el tribunal dispuso que fuera ingresado al Hospital Horwitz el 7 de noviembre de 2023, fijándose audiencia de revisión de la medida cautelar para el 22 de marzo de 2024, porque sería evaluado el día anterior por el referido Hospital. Informó posteriormente que el imputado se encuentra actualmente en libertad.

Por su parte, el imputado Benjamín Esteban Bordillo Catrimán, en internación provisional en el Módulo N° 18 del mismo centro penal, se ordenó su ingreso al Hospital Horwitz el 18 de diciembre de 2023, debiendo ser analizado psiquiátricamente el 5 de enero de 2024, estando a la espera del dictamen pericial.

Séptimo: Que, el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, da cuenta en relación al imputado Roland Baudilio Caniullán Rubilar, que en audiencia de 20 de octubre de 2023 se decretó la suspensión del procedimiento en virtud del artículo 458 del Código Procesal Penal, decretándose la medida cautelar de internación provisional, ordenando mantenerlo en el C.D.P. Santiago Uno, apartado, a la espera de su traslado al Hospital Horwitz. Destaca que se recibió el informe pericial y a la fecha está en espera de ser trasladado a la UEPI del Hospital psiquiátrico señalado.

Octavo: Que, informando el Juzgado de Garantía de Curacaví, da cuenta respecto al imputado Brandon Esteban Gallardo Albornoz, que en audiencia de 25 de noviembre de 2023 se ordenó su ingreso al ASA del C.D.P. Santiago Uno, al no existir cupo en el Hospital Horwitz, disponiendo además oficiar a ese centro, al Hospital Psiquiátrico de Valparaíso y al Hospital Philippe Pinel de Putaendo, para que informen la factibilidad de un cupo para hacer su ingreso, solicitud que se reiteró el 4 de enero de 2024.

Agrega que la medida se adoptó luego de haber tenido contacto telefónico con la funcionaria de Gendarmería que se desempeña en la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas del Hospital Horwitz, quien señaló la imposibilidad de acceder al ingreso del imputado, debido a que los



30 cupos disponibles estaban asignados y, la existencia de una lista de espera para ingreso de alrededor de 90 imputados adicionales.

Por lo anterior, atendida la necesidad de sujetarlo a un tratamiento médico, sólo posible de realizar en un centro de salud y no en forma ambulatoria, se debió recurrir al ingreso al ASA del C.D.P. Santiago Uno, por la carencia de centros o unidades de salud mental que permitan el ingreso de imputados.

Añade que el artículo 457 inciso 2° del Código Procesal Penal se transforma en letra muerta, al no existir de parte del Estado la incorporación de recursos suficientes para tener los apoyos necesarios para las personas que se encuentren en estado de enajenación mental. Así, no existiendo ni creándose otros centros de salud mental, incluso antes de la implementación de la Reforma Procesal Penal, existe un déficit de unidades de salud mental cerradas y ambulatorias, así como en los recintos penitenciarios públicos o licitados desde hace más de 24 años.

Observa que lo anterior deriva en una falta grave de servicio del Estado para la solución del problema, al no invertir en los centros de salud mental, vulnerando desde hace décadas las condiciones de dignidad de los imputados en estado de enajenación mental, al no dar protección a los elementos mínimos de vida, afectando aún más la situación de salud y la integridad física y psíquica de esas personas, viéndose endosada esa responsabilidad a los Tribunales de Justicia, que no son los llamados a dar solución al problema.

Noveno: Que, por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se informó en relación al amparado Francisco Javier Vargas Gutiérrez, que recibió informe del Hospital Horwitz, indicando el 8 de marzo de 2024, que está en lista de espera con el N° 35 para la elaboración del informe pericial y, el 4 de marzo se informó por Gendarmería su traslado al Módulo N° 2, en espera de su derivación al referido hospital, estando segregado del resto de la población penal, dependencia que corresponde a un ala acondicionada del Hospital Penitenciario. Además, en audiencia de 21 de febrero se ofició al SEREMI de Salud Metropolitana para que informe dentro de 15 días, señalando cuáles serían los centros de salud pública con posibilidad para hospitalización residencial permanente de patologías psiquiátrica, sin respuesta a la fecha.



Respecto del imputado Josué Baltazar González González, desde el 9 de enero de este año está sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

En la causa seguida en contra de Mauricio de Souza Lima, está en internación provisional desde el 20 de noviembre de 2023, teniendo fecha para la realización de la pericia psiquiátrica para el 19 de abril de 2024. En audiencia de 12 de enero de 2024 se mantuvo la medida y se ofició al ASA del Hospital Penitenciario para que mantenga al imputado en dicho centro, por el riesgo que presenta para sí mismo y el resto de la población penal, debiendo permanecer separado.

En los autos seguidos en contra del imputado Fuat Andrés Salas Seydewitz, desde la audiencia de 25 de enero de 2024 está sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Por su parte, el imputado Michael Andrés Carvacho Cordero, por decisión de esta Corte, de 27 de diciembre de 2023, está sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario y sujeción semanal al Hospital Horwitz.

Agrega que respecto de los imputados que se mantienen en internación provisional, los jueces de ese Tribunal han dejado constancia en las actas de las visitas semanales de cárcel, remitidas a esta Corte, y en cada uno de los procesos, de las dilaciones que se han producido en la asignación de horas para la elaboración de los informes periciales solicitados al Servicio Médico Legal y el Hospital Horwitz, despachando cuando ha sido posible oficio a otros servicios médicos para que dieran cuenta de los diagnósticos o tratamientos, para contar con más o mejores antecedentes, y solicitando información a las autoridades administrativas, como el SEREMI de Salud Metropolitano y el Servicio de Redes Asistenciales, a fin de determinar otras instancias para el cumplimiento de la medida cautelar de internación provisional.

Como otros Juzgados, señala que en su oportunidad se ha ordenado la internación provisional de los imputados en el Hospital Horwitz, recinto que se ha negado a recibirlos por escasez de recursos, dando cuenta en cada caso del número en lista de espera para la elaboración de informes, por lo que son derivados al C.D.P. Santiago Uno, lugar donde tampoco se acata en alguna oportunidad las órdenes de mantenerlos bajo supervisión sanitaria en el Hospital ASA o algún anexo habilitado.



Señala que las dimensiones de este recurso de amparo afectan un problema de seguridad pública, así como la seguridad de las víctimas en los casos concretos, pero que tiene su origen en un problema de salud mental, que no ha sido resuelto ni abordado por las autoridades pertinentes, pues no se ha dado abasto con las redes comunales a las coberturas de seguimiento, con las cuales se podrían adoptar medidas cautelares ambulatorias eficientes, y eso se ve reflejado en la lista de espera en las causas de violencia intrafamiliar, como ocurre con la capacidad para la emisión de informes periciales por las instituciones pertinentes, dilatando innecesariamente la decisión del persecutor penal en la dirección de estos procesos, cuestiones que han sido advertidas a todos los intervinientes.

Décimo: Que, evacuando el informe requerido el Juzgado de Garantía de Melipilla, destaca que en sólo dos de las causas referidas en el recurso el imputado está sujeto a la medida de internación provisional en el C.D.P. Santiago Uno.

En efecto, el imputado Camilo Andrés Gamboa Contreras está libre desde el 26 de diciembre de 2023, y el imputado Raúl Patricio Morrison Ibáñez, está en libertad a contar del 5 de enero de 2024.

Por su parte, el imputado Rodrigo Eduardo Pizarro Armijo está cumpliendo la medida de internación provisional en el Hospital Horwitz Barak desde el 29 de diciembre de 2023.

Así, se mantienen bajo esa medida en el C.D.P. Santiago Uno los imputados Sergio Domingo Ahumada Valdenegro, en lista de espera con el N° 3 para su ingreso al Hospital Horwitz, y, el imputado Paul Brayan Alarcón Curallán, en lista de espera en el lugar N° 25.

Hace presente que en cada caso al momento de decretar la medida cautelar se ofició al Hospital Horwitz, a fin de solicitar un cupo en ese establecimiento, pero al no existir camas médicas que permitieran recibirlos se ordenó el ingreso a Gendarmería de Chile, requiriendo que fueran recibidos en un lugar especial, distinto al del resto de los imputados, atendida la disponibilidad y escasos recursos con los que cuenta Gendarmería.

Agrega que ese Tribunal ha trabajado en un protocolo en conjunto con la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Local de Melipilla, para hacer un esfuerzo de parte de todas las instituciones para que exista coordinación y se



puede otorgar una hora lo antes posible, y así otorgar justicia oportuna y de calidad a los intervinientes.

Undécimo: Que, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, informó respecto de los imputados que mantienen causas vigentes en ese Tribunal.

Da cuenta, así, que en la causa seguida en contra de Patricio Andrés León Carrasco, se recibió informe de 24 de noviembre de 2023, en cuya virtud el 10 de enero de 2024 se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento, por no corresponder el diagnóstico a una situación de enajenación mental, estando actualmente en prisión preventiva.

En la causa seguida en contra de Daniel Edmundo Fernández Pradena, da cuenta que el 7 de marzo de 2024 se realizó audiencia de revisión de la internación provisional, oportunidad en que se informó que Gendarmería no lo trasladó a la realización de la pericia psiquiátrica el 24 de enero de este año y que no ha recibido su medicación. El imputado, según informe de octubre de 2023 se encuentra en el C.D.P. Santiago Sur, en el Módulo D. En la audiencia de marzo se ofició a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que en el plazo de 10 días informe sobre un cupo para hospitalización psiquiátrica, y se ordenó su traslado inmediato al ASA de Gendarmería para ser entrevistado por psiquiatra y reanudar su medicación. Igualmente, se ordenó a Gendarmería informar por qué no fue trasladado a la pericia, estando fijada audiencia de revisión para el 25 de marzo pasado, sin que se hubiera recibido respuestas a sus oficios. Observada la causa, se constató que en dicha audiencia se sustituyó la medida cautelar por las de arresto domiciliario y arraigo nacional, estando citado para el 23 de julio de este año para la realización del examen psiquiátrico.

Respecto de Sebastián Nicolás Blásquez González, se recibió informe pericial el 1 de diciembre de 2023, en cuya virtud el 19 de ese mes y año se decretó la reapertura del procedimiento y la mutación de la medida a la de prisión preventiva, por no corresponder su diagnóstico a enajenación mental.

En el caso de Alexis Jesús Cano Salazar, en audiencia de 12 de marzo de 2024 se modificó la medida cautelar por la de arresto domiciliario total, teniendo hora para el 9 de mayo de 2024 en el Hospital Horwitz para la realización de la pericia correspondiente.

Así, el único imputado que se mantiene en internación provisional es Daniel Fernández Pradena.



Concluye que no se ha incurrido en un acto ilegal que prive o perturbe la libertad personal del imputado, pues si bien debe procurarse la internación en un establecimiento psiquiátrico, como fue decretado por el Juzgado, dicha medida no se ha podido cumplir a la fecha debido a que los establecimientos psiquiátricos no tienen cupos disponibles, estando el amparado en lista de espera para su ingreso y realización de la pericia.

Así, la demora está motivada por una razón fáctica no imputable a los Jueces de Garantía, que han realizado todas las diligencias tendientes a procurar el cumplimiento de la medida en un recinto hospitalario adecuado.

Duodécimo: Que, el Juzgado de Garantía de Talagante, en la causa seguida en contra de Eduardo Alejandro Pérez Armijo, informó que en audiencia de 17 de agosto de 2023 se suspendió el procedimiento de conformidad con el artículo 458 del Código Procesal Penal, mutando la medida cautelar de prisión preventiva por la de internación provisional, disponiendo en esa oportunidad que se oficiara al Hospital Horwitz para que proporcione un cupo para su internación y elaboración de informe al tenor del artículo citado y, al ASA del C.D.P. Santiago Uno, para su ingreso hasta la espera de un cupo en el Hospital señalado.

Con fecha 1 de septiembre de 2023 se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y se ordenó que cumpla la medida de prisión preventiva.

Luego, el 27 de diciembre de 2023, se recibió informe de facultades mentales del imputado, que concluye que su diagnóstico no corresponde a la categoría de enajenación mental.

Respecto de la causa seguida en contra de Alex Aaron Valenzuela Fuentes, informó que el 3 de agosto de 2023 se recibió el informe pericial psiquiátrico, dando cuenta que su diagnóstico corresponde a la categoría de enajenación mental, siendo peligroso para sí mismo y para terceras personas. Con fecha 5 de septiembre de 2023, se recibió ampliación del informe, en que se mantiene que es un peligro para sí mismo y para terceras personas; y, el 12 de febrero de 2024 el Hospital Horwitz informó que el amparado está en el lugar N° 12 del listado de espera para ser ingresado a la UEPI.

Décimo tercero: Que, informando el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, en relación al imputado Sergio Michel Jeldres Lagos, dio cuenta que por resolución de 27 de noviembre de 2023 se dispuso la suspensión del



procedimiento y se ordenó su ingreso en internación provisional en el Hospital Horwitz, orden que al 12 de marzo de 2024 no se ha concretado. Añade que el hospital se limita a informar que el imputado está en el lugar N° 110 de la lista de espera para su ingreso.

Estima que efectivamente existe una vulneración de los derechos del imputado, toda vez que su internación provisional debe cumplirse en un recinto distinto a aquel en que actualmente está recluso. Sin embargo, y pese a existir una orden del tribunal, el Hospital Horwitz se niega a recibir a este y otros imputados alegando falta de espacio en sus dependencias.

Lo anterior, entiende, conlleva eventuales riesgos para la salud mental de este y otros imputados, además de para su integridad física, como se alegó en audiencia de cautela de garantías del día 11 de marzo del año en curso.

Décimo cuarto: Que, el Juzgado de Garantía de Colina, en la causa seguida en contra del amparado Jeremías Andrés Veliz Pastén, da cuenta que con fecha 19 de julio de 2023 se decretó la medida de internación provisional, oficiando al Hospital Horwitz para que realizará el informe de facultades mentales, peligrosidad e inimputabilidad del amparado y, al Hospital Psiquiátrico doctor Philippe Pinel, para evaluar la factibilidad de camas disponibles para su traslado a ese recinto, por ser de conocimiento público que el Hospital Horwitz no tiene plazas disponibles.

Por lo anterior y esperando una respuesta, el imputado fue ingresado al C.D.P. Santiago Uno, al ASA-Hospital Penal, al tener conocimiento de que en ese recinto existe una unidad para recibir transitoriamente imputados con el procedimiento suspendido por el artículo 458 del Código Procesal Penal.

Luego de dar cuenta de la tramitación de la causa, hace presente que el 12 de marzo de 2024, por contacto telefónico, se tomó conocimiento que el imputado ingresó al Hospital Horwitz el 22 de enero de 2024.

Décimo quinto: Que, informó el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a los amparados Andrés Ignacio Morales Jorquera y Luis Roberto Águila Garrido.

Respeto al primero, señala que actualmente está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, acusado y fijada audiencia de preparación de juicio oral para el 1 de abril de 2024, habiéndose reanudado el procedimiento el 12 de febrero del presente año, en atención a que el informe psiquiátrico



concluyó que el diagnóstico no corresponde a la categoría de enajenación mental.

En relación al segundo imputado, está sujeto a la medida de internación provisional desde el 29 de noviembre de 2023, ordenándose su ingreso al C.D.P. Santiago Uno en tanto se genera un cupo en el Hospital Horwitz. La última revisión se hizo el 13 de febrero de 2024 y, consta en visita de cárcel del 8 de marzo de este año, que en general los imputados no manifiestan tener quejas o reclamos respecto al trato y alimentación, presentan buen estado de salud, y que este imputado se encuentra a la espera de su ingreso al centro psiquiátrico, manteniendo tratamiento médico.

Hace presente, finalmente, que por Oficio de 30 de noviembre de 2023 del Hospital Horwitz, se le indicó al Tribunal que ese centro cuenta con solo 30 camas para la medida de internación provisional, existiendo una lista de espera a esa fecha de 108 imputados, rogándoles entender su situación, respetar la lista de espera y no apercibirlos, puesto que ello provoca un daño enorme a su funcionamiento, sus usuarios y al sistema en general, al saltarse otras peticiones anteriores de otros tribunales.

Por último, respecto del amparado José Matías Lizama Vásquez, al 21 de febrero de 2024, informa que la medida cautelar de internación provisional se estaba cumpliendo en el Hospital ASA del C.D.P. Santiago Uno, estando en el lugar N° 65 de la lista de espera para su ingreso a la UEPI.

Hizo presente, al informar a su respecto, además, que tiene en consideración que la organización de recursos de los recintos hospitalarios es una facultad exclusiva de la Administración del Estado, siendo circunstancias excepcionales que los Tribunales de Justicia, y en específico esta Corte, en uso de sus facultades conservativas y restaurativas que ordene la disposición de recursos a ese poder del Estado y, por tanto, la decisión adoptada en su momento por ese Juzgado también se relaciona con evitar posibles desviaciones de poder, que en una audiencia de revisión de medidas cautelares en esa instancia no es posible resolver.

Décimo Sexto: Que, al informar el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto al imputado Gabriel Ernesto Garrido Vargas, da cuenta que el 12 de enero del año en curso Gendarmería informó su ingreso a la UEPI del Hospital Horwitz y, el 24 de enero de este año se decretó la reapertura del procedimiento, y el alzamiento de la medida de internación



provisional, disponiendo su libertad inmediata, no siendo efectivo que esté privado de libertad en un recinto de Gendarmería o en el Hospital Horwitz. Revisada la causa, consta que en la última fecha señalada, en audiencia, se sustituyó la medida de internación provisional por la de prohibición de acercarse a la víctima, en los términos del artículo 9° letra b) de la Ley N° 20.066.

En el caso de Oscar Glenn Cortés Bravo, se decretó la internación provisional en el Hospital Horwitz, no obstante por contar ese recinto con una extensa lista de espera, se dispuso su ingreso en el C.D.P. Santiago Uno, hasta su traslado. El 23 de junio de 2023 se informó que estaba en el lugar N° 61 de la lista de espera para su ingreso; subiendo al lugar N° 8 según informe de 8 de marzo de 2024, siendo efectivo lo señalado por el recurrente de amparo, en el sentido que el imputado actualmente está en un recinto carcelario. Agrega que a pesar de haberse solicitado y reiterado al Servicio Médico Legal y al Hospital Horwitz la realización del informe de facultades mentales, por oficios de 22 de agosto de 2023, 7 de febrero y 11 de marzo de 2024, a la fecha ninguno ha fijado una hora de atención.

En la causa seguida en contra de Alex Jordano Jiménez Cerna, el 17 de enero de 2024 se remitió informe de facultades mentales, en que se concluye que su diagnóstico no corresponde a enajenación mental, por lo que se fijó audiencia para el 18 de marzo de 2024, para discutir su situación procesal.

En el caso de Carlos Andrés Encina Peña, el 3 de noviembre de 2023 se recibió informe de facultades mentales, que da cuenta de la existencia de una categoría de enajenación mental. Atendido lo anterior, ante petición de la Defensa, el 15 de noviembre de 2023 se ofició al Hospital Horwitz, para solicitar la posibilidad de priorizar su traslado, por estar descompensado, convirtiéndose en un riesgo para sí y para terceros, sin respuesta. El 17 de enero de 2024 se ordenó la reapertura del procedimiento y su traslado al Hospital Horwitz, entidad que respondió el 22 de enero de este año que el amparado se encuentra en el lugar N° 56 de la lista de espera. El 15 de febrero se indicó que estaba en el lugar N° 49, manteniéndose a la fecha privado de libertad en el C.D.P. Santiago Uno.

Décimo séptimo: Que, por su parte, el Juzgado de Garantía de San Antonio, en relación al imputado Joel Armando Martínez Borne, hace



presente que en audiencia de 7 de marzo de 2023 se suspendió el procedimiento por aplicación del artículo 458 del Código Procesal Penal, ordenando su internación provisional en el ASA del C.D.P. Santiago Uno.

En audiencia de 14 de diciembre de 2023, se ordenó oficiar al Servicio Médico Legal con el objeto de la realización de la correspondiente pericia psiquiátrica, sin que a la fecha de su informe -12 de marzo de 2024-, conste que se haya ingresado al ASA del C.D.P. Santiago Uno o que se haya realizado la pericia.

Décimo octavo: Que, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, informó en el caso del imputado Luciano Patricio Matamala Pérez, que en audiencia de 9 de enero de 2024, se revocó la medida cautelar que pesaba sobre el imputado y, en su lugar, se decretó la medida de arraigo nacional, informándole al amparado que debe asistir el 25 de septiembre de este año al Hospital Horwitz, estando en libertad a contar de esa fecha.

Décimo noveno: Que, por el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, compareció su Director don Juan Maass Vivanco, dando cuenta que ese recinto es un establecimiento de autogestión en red, acreditado, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Da cuenta que la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI), dependiente del Centro de Responsabilidad de Psiquiatría Forense de ese recinto, es una unidad especializada en la realización de evaluaciones periciales psiquiátricas, con el objeto de determinar la imputabilidad o inimputabilidad, por enajenación mental -evaluación de facultades mentales-, al tenor del artículo 458 del Código Procesal Penal, de una persona por presentar alguna patología psiquiátrica que haga que la persona sufra una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.

Refiere que las evaluaciones se realizan al tenor de lo ordenado por un tribunal con competencia penal, ya sea de manera ambulatoria, o cuando se ordena la medida cautelar de internación provisional y, por tanto, de acuerdo a los cupos de cama de esa unidad, se interna al imputado con el objeto de realizar la evaluación y confeccionar el informe.

La UEPI de Varones, indica, cuenta con sólo treinta camas para sustituir la prisión preventiva por internación provisional con ese fin.



Sobre las hospitalizaciones por patologías psiquiátricas, afirma que en caso de lo que se requiera es la atención asistencial para que sea otorgada al imputado, se puede dar en cualquier hospital que tenga un servicio de atención en psiquiatría, y de acuerdo a las Leyes N° 20.584 y N° 21.331, las hospitalizaciones por este motivo son de carácter restrictivo, es decir, no toda enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual se debe hospitalizar, debiendo preferirse la atención ambulatoria o domiciliaria.

Sobre el fondo del recurso, precisa que del listado de 44 amparados, 28 están en lista de espera y, del resto, 12 ya han sido internado en la UEPI, se cambió la medida cautelar, o fue dejada sin efecto.

Afirma que contrario a lo sostenido por Gendarmería, la internación provisional como medida cautelar, según el artículo 464 del Código Procesal Penal, además de cumplir con los requisitos de los artículos 140 y 141, el informe psiquiátrico practicado al imputado debe señalar que este sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas, requisitos copulativos para que proceda.

Da cuenta que otro aspecto que se debe considerar es el tiempo de demora o atraso en la diligencia o gestión en las respectivas causas de los imputados hospitalizados en la UEPI, que provoca un aposamiento o retraso en el egreso de los hospitalizados, ya que el alta, acto médico, no produce efecto si no es por la orden de egreso de la judicatura y, si los procesos se mantienen suspendidos porque los intervinientes no reactivan la tramitación del procedimiento, repercute en que se produzca una lista de espera.

Señala que en caso de no haber cupo en las dependencias de la UEPI, al tenor del artículo 13 N° 5 de la Ley N° 21.331, la hospitalización involuntaria debe realizarse en el centro asistencial de la red pública más cercano al domicilio, al tenor de lo que indica la red pública asistencial.

Concluye afirmando que el ánimo de esa institución no es incumplir con las órdenes judiciales, ni quebrantar lo ordenado por un Tribunal de la República, sino que ante una imposibilidad fáctica, no se ha dado cumplimiento con la hospitalización.

Vigésimo: Que, informando el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la causa seguida en contra del imputado Giorgio Paolo Palavecino Ramos, indica que no es efectivo que se encuentre en la hipótesis del



artículo 458 del Código Procesal Penal, atendido que el 16 de octubre de 2023 se remitió el informe psiquiátrico del imputado, indicando que su diagnóstico no corresponde a una categoría de enajenación mental.

Por lo anterior, en audiencia de 8 de noviembre de 2023, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y se mantuvo en prisión preventiva, por resolución firme.

Vigésimo primero: Que, por su parte, el 14° Juzgado de Garantía de esta ciudad, en los autos seguidos en contra del imputado Eduardo Andrés Namuncura Namuncura, manifiesta que con fecha 6 de marzo de 2024 se informó por Gendarmería que el imputado fue trasladado desde el Hospital Penitenciario ASA al Hospital Horwitz, para ser estabilizado, ordenándose en esa audiencia su mantención en ese recinto; junto con ordenar que informe si se realizó el informe pericial y, de ser así, que le sea remitido.

Vigésimo segundo: Que, informa el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa tramitada en contra de José Matías Lizama Vásquez, sindicando que con fecha 5 de diciembre de 2023 ese Tribunal se declaró incompetente, remitiendo los antecedentes al 2° Juzgado de Garantía de esta ciudad, sin perjuicio de haber ordenado previamente su traslado al Hospital Horwitz.

En el caso de Andrés Mauricio Palomino Ibáñez, el 15 de noviembre de 2023 se decretó la suspensión del procedimiento y se dispuso la medida cautelar de internación provisional a cumplirse en el Hospital Horwitz, disponiendo que en caso de que no cuente con cupos, Gendarmería debía ingresarlo en dependencias del ASA del C.D.P. Santiago Uno.

El 30 de noviembre de 2023 el Hospital informó que no tenía cupos y que el imputado estaba en lista de espera con el N° 106. El 20 de febrero de 2024 avanzó al lugar N° 67, y fue citado para el 28 de mayo de este año para evaluación psiquiátrica.

Por su parte, el 2 de enero de 2024 se ofició al Hospital Philippe Pinel, quien también dio cuenta que no cuenta con cupos disponibles, asignándole al imputado el lugar N° 66 en lista de espera.

El 15 de febrero de 2024 el Hospital ASA dio cuenta que es posible hospitalizar al imputado en ese recinto, contando con cama disponible para ello.



Por último, el 22 de marzo pasado estaba agendada audiencia de revisión de la medida cautelar. Revisada la causa, no aparece que dicha audiencia se haya celebrado.

Vigésimo tercero: Que, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, en relación al imputado Isaac Díaz Cantillana, dio cuenta que está en libertad a contar del 11 de marzo del presente año.

Vigésimo cuarto: Que, informó doña Yasmina Viera Bernal, abogada, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud.

Como normativa aplicable, indica que de conformidad con el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, a esa Secretaría de Estado le compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, y de rehabilitación de la persona enferma, así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.

Hace presente que en estos casos, se presenta la necesidad de ratificar o negar la sospecha de inimputabilidad de los imputados, lo que obliga a la suspensión del procedimiento, ya que de conformidad con el artículo 464 del Código Procesal Penal, se requiere del pronunciamiento de especialistas en la materia.

En estos casos, el tribunal podrá ordenar la internación provisional del imputado, si se cumplen los requisitos de los artículos 140 y 141 del referido Código y, si el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.

Da cuenta que de conformidad con el artículo 16 del DFL N° 1 de 2005, los Servicios de Salud tienen a su cargo la articulación, gestión y el desarrollo de la red asistencial correspondiente para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona enferma. Esos organismos estatales son funcionalmente descentralizados, y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios para la realización de las acciones de salud de su competencia.

En el caso de los amparados, habiendo consultado con los Servicios de Salud, y según lo informado por el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel



y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, la situación de los imputados en cada caso es:

1) Pablo Andrés Vega Cárdenas, está en el lugar de espera N° 10 en el Hospital Horwitz;

2) Daniel Edmundo Fernández Pradena, está en el lugar de espera N° 21 en el Hospital Horwitz;

3) Oscar Glenn Cortés Bravo, está en el lugar de espera N° 8 en el Hospital Horwitz;

4) Alex Jordano Jiménez Cera, está en el lugar de espera N° 6 en el Hospital Horwitz;

5) Carlos Andrés Encina Peña, está en el lugar de espera N° 29 en el Hospital Horwitz;

6) Héctor Francisco Parra Fuentes, está en el lugar de espera N° 32 en el Hospital Horwitz;

7) Andres Ignacio Morales Jorquera, está en el lugar de espera N° 44 en el Hospital Horwitz;

8) Luis Roberto Aguirre Garrido, está en el lugar de espera N° 47 en el Hospital Horwitz;

9) Alexis Jesús Cano Salazar, está en el lugar de espera N° 46 en el Hospital Horwitz;

10) Benjamín Esteban Bordillo Catrimán, está en el lugar de espera N° 53 en el Hospital Horwitz;

11) Sergio Domingo Ahumada Valdenegro, está en el lugar de espera N° 4 en el Hospital Horwitz;

12) Alex Aaron Valenzuela Fuentes, está en el lugar de espera N° 5 en el Hospital Horwitz;

13) Eduardo Alejandro Pérez Armijo, está en el lugar de espera N° 15 en el Hospital Horwitz;

14) Paul Brayan Alarcón Curallán, está en el lugar de espera N° 25 en el Hospital Horwitz;

15) Franco Giovanni Savrón Venegas, está en el lugar de espera N° 30 en el Hospital Horwitz;

16) Brandon Esteban Gallardo Albornoz, está en el lugar de espera N° 41 en el Hospital Horwitz, y en el lugar N° 37 en el Hospital Philippe Pinel;



17) Alfredo Arnoldo Urrutia Díaz, está en el lugar de espera N° 51 en el Hospital Horwitz;

18) Roland Baudilio Caniullán Rubilar, está en el lugar de espera N° 27 en el Hospital Horwitz;

19) Francisco Javier Vargas Gutiérrez, está en el lugar de espera N° 34 en el Hospital Horwitz;

20) Andrés Mauricio Palomino Ibáñez, está en el lugar de espera N° 45 en el Hospital Horwitz, y en el lugar N° 42 en el Hospital Philippe Pinel;

21) Mauricio de Souza Lima, está en el lugar de espera N° 38 en el Hospital Horwitz;

22) Faut Andrés Salas Seydewitz, está en el lugar de espera N° 42 en el Hospital Horwitz;

23) José Matías Lizama Vásquez, está en el lugar de espera N° 23 en el Hospital Horwitz;

24) Juan Jesús Carrasco Madrid, está en el lugar de espera N° 19 en el Hospital Horwitz, y en el lugar N° 30 en el Hospital Philippe Pinel;

25) Nelson Jeremías Muñoz Fuentes, está en el lugar de espera N° 2 en el Hospital Horwitz;

26) Reidin León Castañeda Marchant, está en el lugar de espera N° 22 en el Hospital Horwitz;

27) Sergio Michel Jeldres Lagos, está en el lugar de espera N° 43 en el Hospital Horwitz; y

28) Isaac Guillermo Díaz Castellana, está en el lugar de espera N° 50 en el Hospital Horwitz.

De lo anterior observa que existe una imposibilidad material de recibir a 44 pacientes de forma inmediata, sin perjuicio de que se han realizado y se están gestionando las acciones tendientes que correspondan, para las prestaciones necesarias, con el objeto de asegurar la recuperación y perseveración de la salud de las personas, considerando la capacidad hospitalaria, así como el resguardo de los derechos de los amparados.

Añade que la Subred de Psiquiatría Forense presenta entre sus puntos de atención Unidades Clínicas, que por objetivo presentan la evaluación pericial hospitalaria por sospecha de enfermedad mental, destinadas a personas que cumplan con la cautelar provisional en conformidad con el artículo 464 del Código Procesal Penal.



Detalla que estas unidades son:

a) Las Unidades de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI), que en su mayor parte sus camas están ubicadas en el H. Philippe Pinel de Servicio de Salud Aconcagua, con 20 camas; y el Hospital Horwitz, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que cuenta con 40 camas UEPI; y el Servicio de Salud Araucanía Sur, con 10 camas en Temuco.

b) Las Unidades Psiquiátricas Forenses Transitorias (UPFT). Ubicadas al interior de la cárcel de Arica (14 camas), Valparaíso (16 camas), y Magallanes (6 camas).

Afirma que, a nivel central, se están realizando constantes evaluaciones del funcionamiento de estas unidades, en relación con la demanda, oferta actual, tiempos de estada de los pacientes y el flujo de red, puesto que al ser dispositivos que responden a mandatos judiciales, sus tiempos y listas de espera afectan y limitan la producción y egresos clínicos. A modo de ejemplo, el promedio nacional de días para unidades de evaluación e inicio de tratamiento durante el año 2021 fue de 235 días.

Destaca, en ese sentido, que se ha concluido que para avanzar en la respuesta oportuna de las necesidades de las personas, es importante en conjunto con el Poder Judicial, agilizar la salida de los usuarios de las unidades que ya cuentan con orden de alta clínica, presentan peritajes y están a la espera de audiencia, lo que permite que la gestión y respuesta a los casos sea más ágil, resguardando los tiempos de estada, la pertinencia de ingreso y el apoyo intersectorial para la respuesta integrada.

Observa, por último, que se han incluido tres pacientes con duplicidad de ingreso en la lista de espera de dos hospitales, lo que dificulta la utilización óptima de camas; nudo crítico que se ha presentado en las instancias de trabajo intersectorial y en la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, así como en espacios de articulación con el Servicio Médico Legal.

No obstante lo anterior, se requiere generar estrategias en conjunto con el Poder Judicial para optimizar la agenda de audiencias, así como los flujos y procesos, para mejorar y fortalecer el funcionamiento de la Subred de psiquiatría forense.

Solicita considerar que se han realizado y se están gestionando las acciones tendientes que correspondan para las prestaciones necesarias, con el objeto de asegurar la recuperación y perseveración de la salud de las



personas, considerando la capacidad hospitalaria, así como el resguardo de los derechos de los amparados.

Vigésimo quinto: Que, informa el 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, respecto del imputado Reidin León Castañeda Marchant, sometido a la medida cautelar de internación provisional decretada por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, cumpliéndose en el C.D.P. Santiago Uno.

Indica que desde el ingreso del auto de apertura a ese Tribunal, se ha instado en diversas instancias para materializar el traslado del imputado a una unidad de salud, específicamente al Hospital Horwitz o Philippe Pinel, quienes los días 27 y 28 de noviembre informaron que está en lista de espera.

Da cuenta que con esa fecha, 14 de marzo de 2024, en audiencia a la que comparecieron la Defensa, la Fiscalía y Gendarmería, se dispuso nuevamente gestionar un cupo y disponer el ingreso del acusado a cualquiera de los centros de salud citados, lo que deberá gestionarse hasta el 24 de marzo, oficiándose a la SEREMI de Salud, quien deberá gestionar en un plazo máximo de 48 horas el cupo respectivo, lo que se hizo con copia al Ministerio de Salud y de Justicia, bajo apercibimiento de desacato. Revisada la causa, consta que por informe de 18 de marzo de 2024, el imputado se encuentra en lista de espera con el N° 13 para su ingreso al Hospital Horwitz; y por informe del día 19 de ese mes y año, el Hospital Phillippe Pinel dio cuenta que tiene registrado el lugar N° 33 de la lista de espera.

Vigésimo sexto: Que, por presentación de 28 de marzo de 2024, don Jorge Sáez Martín, Fiscal Judicial Subrogante de la Corte Suprema, solicitó tener presente que en las funciones habituales de visita a los recintos penitenciarios practicadas por los distintos Fiscales Judiciales de las Cortes de Apelaciones del país y, especialmente aquellos correspondientes a la Región Metropolitana, han podido constatar, advertir, observar e informar la deteriorada situación que sufren las personas internadas que tienen determinadas alteraciones mentales y se encuentran privadas de libertad por orden judicial.

Afirma que, sin duda, la mayor afección se produce al mantener a dichas personas vulnerables en recintos penitenciarios, desconociéndose lo establecido en el antiguo Código de Procedimiento Penal, que en su artículo



691 disponía que la medida de seguridad y protección de internación de un enajenado mental deberá cumplirse en un establecimiento destinado a enfermos mentales, en la forma y condiciones que establezca el Juez, mismo criterio y estándar legal mantenido en los artículos 457 y 458 del Código Procesal Penal.

Da cuenta que a pesar de haberse hecho saber a las autoridades del ámbito de la salud la deteriorada situación de las personas afectadas en su salud mental, y que requieren la atención especializada que sólo se les puede brindar a través de las redes públicas, ello no ha sido resuelto, y señala que no existen los cupos pertinentes, ni el presupuesto adecuado para superar las carencias que afectan los derechos de esos internos.

Estima que esto amerita una intervención judicial, para que esta Corte, en definitiva, adopte las medidas que según el artículo 21 de la Constitución Política de la República sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y se otorgue la debida protección a los afectados.

Acompaña, igualmente, Reporte de Seguimiento Mensual a Establecimientos Carcelarios, elaborado por la Fiscal Judicial de esta Corte de Apelaciones, doña Macarena Troncoso López, a la UEPI del Hospital Horwitz, en que se expone la situación a febrero de 2024, en que se advierte la cantidad de personas en lista de espera para ingresar como interno a ese recinto, que suma 79 hombres y 13 mujeres. En el caso de los hombres, el más antiguo en lista de espera fue incorporado a ella en marzo del año 2022 y, en el caso de las mujeres, en marzo de 2023.

Vigésimo séptimo: Que, por escrito de 1 de abril de 2024, compareció don Gabriel Aguirre Luco, abogado, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, haciéndose parte en la causa, lo que se tuvo presente por resolución del día siguiente.

Vigésimo octavo: Que, por resolución de 3 de abril de 2024, se ordenó pedir informe a los Juzgados de Garantía de Curacaví, Puente Alto, 14° y 15° de Santiago, debiendo precisar la situación procesal de los amparados Gerson Arriagada Riquelme, Alexis Méndez Méndez, Francisco Morales Morales y Christian Mauricio González Mellado.

Vigésimo noveno: Que, en cumplimiento de lo ordenado, el Juzgado de Garantía de Puente Alto, informó respecto del amparado Alexis Méndez Méndez, dando cuenta que en audiencia de 18 de marzo de 2024, de cautela



de garantías y revisión de la internación provisional, se resolvió alzarla y se decretó su sujeción al COSAM CEIF de Puente Alto.

Por su parte, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, en relación a Francisco Daniel Morales Morales, dio cuenta que fue formalizado el 28 de diciembre de 2023, se dispuso la suspensión del procedimiento y la internación provisional. Con fecha 3 de abril de 2024, en audiencia de cautela de garantías, se resolvió oficiar al C.D.P. Santiago Uno, para que se diera cumplimiento a lo ordenado el 28 de diciembre del año anterior, o se tomaran las medidas pertinentes para acondicionar alguna dependencia o lugar diferente a los módulos de imputados, ya sea en el Hospital Penal u otra área, para que se encuentre separado de la población penal y se cumpla con la medida decretada, fijándose audiencia para la revisión de la medida y designación de curador ad litem para el 10 de abril de 2024.

El 5° Juzgado de Garantía, sobre el amparado Christian Mauricio González Mellado, dio cuenta que el imputado fue trasladado el 16 de febrero de 2024 a la UEPI del Hospital Horwitz, donde actualmente se encuentra cumpliendo internación provisional.

Por su parte, el Juzgado de Garantía de Curacaví, respecto del imputado Gerson José Arriagada Riquelme, dio cuenta que fue formalizado el 9 de enero de 2024, y se decretó la medida cautelar de internación provisional y su ingreso al ASA del C.D.P. Santiago Uno. En enero de este año se informó por el Hospital Horwitz que fue ingresado a lista de espera con el lugar N° 95, y por el Hospital Philippe Pinel en el lugar N° 54. Agrega que en audiencia de 7 de marzo del año en curso se tuvo presente informe de SENADIS, dando cuenta que no tiene centros disponibles para internar al imputado y, se reiteraron oficios al Ministerio de Salud para que informe la disponibilidad de centros asistenciales que cuenten con las capacidades para recibir al imputado, y al Alcaide de la Unidad Penal para que informe semanalmente el estado de salud del amparado y que se mantenga en el ASA, a fin de que no se mezcle con el resto de la población penal.

Trigésimo: Que, por presentación de 4 de abril de 2024, e 1° Juzgado de Garantía de Santiago, complementó su informe, haciendo presente que los imputados Parra Fuentes y Bordillo Catrimán ya no están sujetos a la medida de internación provisional.

Causa Rol N° 649-2024:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXLXNSNPB

Trigésimo primero: Que, se acumuló a esta causa la ingresada con el Rol N° Amparo-649-2024, en que compareció don Yerko Pizarro Astudillo, abogado, Defensor Penal Público, en representación del imputado Daniel Fernández Pradenas, sujeto a la medida cautelar de internación provisional, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución de 7 de marzo del presente año, dictada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que resolvió mantener la medida cautelar ya indicada.

Refiere que su representado fue formalizado el 23 de marzo de 2023 por el delito de robo con intimidación, oportunidad en que se decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

Luego, el 5 de diciembre de 2023, en audiencia del artículo 458 del Código Procesal Penal, se suspendió el procedimiento y se decretó la medida de internación provisional. El 26 de diciembre, el Hospital Horwitz informó que el amparado estaba en el lugar N° 110 en lista de espera para la medida, y que el examen tenía fecha para el 17 de mayo de 2024, entrevista que fue adelantada para el 24 de enero de 2024 por orden del Tribunal, no obstante que Gendarmería no lo trasladó.

En visita de cárcel, de 2 de marzo de 2024, el amparado se mantenía en el "Módulo D" del C.D.P. Santiago Sur, no había sido trasladado al Hospital Horwitz par entrevista y no se le suministraba medicación para el tratamiento de esquizofrenia, incumpliendo lo ordenado por el Juzgado.

Así, en la audiencia de 7 de marzo de 2024, el Tribunal decidió mantener la medida cautelar y ordenó su traslado al ASA de Gendarmería de Chile, a fin de que se gestione que sea entrevistado en forma inmediata por la Psiquiatra de esa unidad y la entrega de medicamentos.

Argumenta que lo resuelto deviene en ilegal por no reunirse los requisitos del artículo 464 del Código Procesal Penal, al no estar materializándose la internación provisional en un recinto asistencial, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Carta Fundamental.

Previas citas jurisprudenciales, solicita que se ordene la liberad inmediata de su representado, quedando sujeto a la medida cautelar de sujeción a tratamiento ambulatorio en el Hospital Horwitz, de conformidad con el artículo 155 letra b) del Código Procesal Penal o, en subsidio, se disponga su traslado inmediato a un centro de salud que reúna las características dispuestas por el legislador en el artículo 464 del citado



Código, oficiando al Hospital Horwitz para que fije dentro del menor tiempo posible fecha de entrevista para la elaboración del informe que determine su estado de salud mental actual.

Trigésimo segundo: Que, informando el Tribunal, dio cuenta de los antecedentes ya expuestos en el motivo undécimo.

Causa Rol N° 652-2024:

Trigésimo tercero: Que, en esa causa, acumulada a esta, compareció doña Sofía Guzmán Mayer, abogada, Defensora Penal Pública, en representación del imputado Oscar Glenn Cortés Bravo, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 5 de marzo del presente año, dictada por el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N° 1835-2023, que mantuvo la medida cautelar de internación provisional en su contra.

Expone que su representado fue formalizado el 22 de junio de 2023, por el delito de robo con intimidación, oportunidad en que se suspendió el procedimiento en virtud del artículo 458 del Código Procesal Penal, y se decretó la medida cautelar de internación provisional, a cumplirse en el Hospital Horwitz, sin perjuicio de mantenerse en el C.D.P. Santiago Uno a la espera de un cupo.

Denuncia que su representado fue agredido por otros internos con armas cortopunzantes, lo que fue informado al Tribunal por Gendarmería el 22 de septiembre de 2023.

Indica que al recurrir el amparado estaba en lista de espera con el N° 8 para su ingreso al Hospital Horwitz, según información del 7 de marzo de este año. Argumenta que lo resuelto deviene en ilegal, al no reunirse los requisitos del artículo 464 del Código Procesal Penal por no estar materializándose la medida cautelar en un establecimiento asistencial, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 letra b) de la Constitución Política.

Previas citas legales, solicita que se revoque la resolución de 5 de marzo de 2024 y se disponga la libertad inmediata del amparado, quedando sujeto a la medida cautelar de sujeción de tratamiento ambulatorio en el Hospital Horwitz, de conformidad con el artículo 155 letra b) del Código Procesal Penal, o en subsidio, se disponga la medida cautelar de arresto domiciliario en su contra; o, igualmente en subsidio, que se disponga su



traslado inmediato a un centro de salud que reúna las características dispuestas por el legislador en el artículo 464 del citado código.

Trigésimo cuarto: Que, al informar el Tribunal, indica que la resolución cuestionada fue debidamente fundada, dictada en audiencia previo debate.

Entiende que no concurren los presupuestos de la acción de amparo constitucional, que la resolución fue dictada en conformidad a la Constitución y las Leyes, no afectó la libertad personal del amparado, y que su internación provisional fue decretada dentro de un debido proceso legal.

Agrega que la deficitaria oferta de plazas de internos es de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, siendo prohibido a los jueces inmiscuirse en la competencia de otros órganos del Estado como lo dispone expresamente el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, y no existe precepto alguno que ordene al Juez de Garantía dejar sin efecto la internación provisional cuando existiere retardo, falta de capacidad, de infraestructura o negativa de la Administración Pública para recibir y albergar a los imputados sujetos a esta medida.

Causa Rol N° 682-2024:

Trigésimo quinto: Que, comparecen en estos autos, acumulados al ingreso Rol N° 638-2024, doña Daniela Báez Aguirre, Defensora Regional Metropolitana Norte, y doña Ximena Silva Céspedes, Defensora Regional Metropolitana Sur (S), en representación de Sergio Ahumada Valdenegro, Paul Alarcón Curallán, Gerson Arriagada Riquelme, Brandon Gallardo Albornoz, Sergio Jeldres Lagos, Alexis Méndez Méndez, Francisco Morales Morales, Franco Savrón Venegas, Álex Valenzuela Fuentes, Christian Mauricio González Mellado, Oscar Glenn Cortés Bravo, Carlos Encina Peña, Daniel Fernández Pradena y Francisco Vargas Gutiérrez, interponiendo acción constitucional de amparo en contra del Ministerio de Salud-Subsecretaría de Redes Asistenciales, los Servicios de Salud Metropolitano Central y Norte, y el Hospital Horwitz Barak, por los argumentos de hecho y de derecho ya expuestos latamente en los ingresos anteriores.

Solicitan que se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados, disponiendo la libertad de sus representados; en subsidio, se dispongan medidas cautelares distintas a la internación provisional acorde a



la condición mental de sus defendidos; en subsidio, que se ordene a los recurridos adoptar todas las medidas necesarias para que los amparados sean trasladados a establecimientos de salud que se disponga por esta Corte, y que cuenten con las condiciones para proporcionarles la atención médica que sus patologías requieren.

Trigésimo sexto: Que, informa el Servicio de Salud Metropolitano Norte, señalando que no pretende desconocer la realidad que enfrenta un número considerable de personas que padecen algún trastorno mental y que no cuentan con el tratamiento adecuado y oportuno por estar privados de libertad, pero no es posible tratar u hospitalizar a los amparados, atendido que los cupos con que cuenta el Hospital Horwitz, de esa dependencia, son limitados, y el aumento de material y recursos humanos no depende de ese Director o de la autoridad del Hospital; unido a que la internación de una persona con problemas psiquiátricos es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 21.331.

Estima que resulta conveniente realizar gestiones coordinadas entre los distintos organismos competentes en la materia, que integran la Administración del Estado, a fin de buscar una solución conjunta al problema en cuestión.

Solicita que se rechace la acción, con expresa condena en costas.

Trigésimo séptimo: Que, al informar el Hospital Horwitz, lo hizo en iguales términos al evacuado en la causa Rol N° 638-2024, al igual que la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Trigésimo octavo: Que, habiéndose solicitado informar a Gendarmería de Chile, lo evacuó en los término que fundan su acción presentada en la causa Rol N° 638-2024.

Trigésimo noveno: Que, por resolución de 2 de abril de 2024, no habiéndose evacuado informe por el Servicio de Salud Metropolitano Central, se resolvió prescindir del mismo.

Causa Rol N° 748-2024:

Cuadragésimo: Que, en esta causa comparece doña Beatriz Antonieta Contreras Reyes, abogada, Jefa Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interponiendo acción constitucional de amparo en contra del Ministerio de Salud, los Servicios de



Salud Metropolitano Central y Norte, y del Hospital Horwitz Barak, por vulnerar el derecho a la libertad personal y seguridad individual de 48 internos, los primeros 44 los individualizados en la causa Rol N° 638-2024, a los que suma los imputados:

45) Gerson Arriagada Riquelme, en causa RIT N° 21-2024, seguida ante el Juzgado de Garantía de Curacaví;

46) Alexis Méndez Méndez, en causa RIT N° 144-2024, seguida ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto;

47) Francisco Morales Morales, en causa RIT N° 7063-2023, seguida ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago; y

48) Christian Mauricio González Mellado, en causa RIT N° 103-2023, seguida ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, internado en el C.C.P. Colina II.

Funda su recurso en los antecedentes de hecho y de derecho que fundan los ingresos anteriores.

Agrega que el ASA o Área de Salud Ambulatoria del C.D.P. Santiago Uno es un establecimiento de atención primaria de salud, es decir, un recinto de baja complejidad, y en relación a la salud mental, cuenta con escasas horas semanales para esas atenciones, sin infraestructura adecuada para la hospitalización de internos con patologías de salud mental, y sin profesionales especialistas de turno las 24 horas.

El C.D.P. Santiago Sur, por su parte, cuenta con una enfermería que dispone de elementos básicos para prestar primeros auxilios, atención primaria y consultas de morbilidad. Tiene 5 paramédicos organizados en turnos que permiten la atención las 24 horas del día, y cuenta con horas de enfermeros y médicos.

A su vez, el C.C.P. Colina II tiene una enfermería a nivel central para toda la población penal, con infraestructura adecuada para el traslado de enfermos en camilla y con condiciones de atención similares a los anteriores.

Entiende que la privación de libertad de los amparados en establecimientos carcelarios constituye un riesgo para su integridad física y psíquica, dada su especial situación de discapacidad y vulnerabilidad, debiendo efectuarse en lugares donde reciban los cuidados médicos adecuados y con personal idóneo.

Solicita, en definitiva, que se declare:



a) La ilegalidad del rechazo o negativa del ingreso de los amparados por parte de los funcionarios del Hospital Horwitz, incumpliendo las resoluciones judiciales que lo ordenan; el rechazo o negativa de ingreso de los amparados a un establecimiento de salud por parte del Servicio de Salud, incumpliendo las resoluciones judiciales que lo ordenan; la supuesta falta de infraestructura y destinación de recursos por parte del Ministerio de Salud para recibir a los amparados, incumpliendo las resoluciones judiciales que así lo ordenan; y la permanencia de los amparados en el C.D.P. Santiago Uno, C.D.P. Santiago Sur y C.C.P. Colina II respectivamente.

b) Que, como consecuencia de lo anterior, se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, ordenando a los servicios y autoridades recurridas que proporcionen los mecanismos y recursos que permitan dar cumplimiento a las órdenes de los Juzgados de Garantía, y que los internos puedan ser trasladados a la brevedad posible al Hospital Horwitz, o bien a otro establecimiento de salud, sea existente o ad hoc para efectos de garantizar su seguridad individual;

c) Se ordene al Ministerio de Salud, informar sobre qué medidas, ha adoptado o está adoptando, para dotar al Instituto Psiquiátrico Hospital Horwitz Barack u otro centro de salud mental con la finalidad de contar con la infraestructura suficiente y profesionales especialistas, para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales correspondientes de acuerdo a lo prescrito por el Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales.

d) Se solicite informe al Ministerio de Salud acerca de qué medidas, ha adoptado o está adoptando, para dotar al Instituto Psiquiátrico Hospital Horwitz Barack u otro centro de salud mental de la infraestructura suficiente y profesionales especialistas, para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales correspondientes de acuerdo a lo prescrito por el Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales, incluyendo las partidas presupuestarias para el año 2024 para dicho efecto; y

e) Se ordene al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que informe las medidas provisionales y protocolos de resguardo de este grupo de personas privadas de libertad con diagnóstico de enajenación mental, que ha dispuesto o elaborado para para gestionar la estadía temporal de los



internos dentro de los recintos penitenciarios, mientras no se haya concretado su ingreso a un recinto hospitalario.

Cuadragésimo primero: Que previo a la revisión particular de cada uno de los imputados en internación provisional, se tiene presente que la situación procesal de éstos ha sido definida por distintos tribunales del país y considerando que el primer reproche dice relación con la resolución de los Tribunales de Garantía que decretaron dicha medida cautelar personal, y siendo ésta el antecedente que trae como consecuencia -por las razones que se expresan en los informes allegados a esta causa- que los imputados se mantengan en recintos penitenciarios en espera del correspondiente informe sobre facultades mentales, procede excluir del análisis de fondo a quienes se encuentran en esa calidad procesal por decisiones de tribunales ajenos a esta jurisdicción, es decir respecto de los cuales esta Corte carece de competencia para revisar tales resoluciones.

Cuadragésimo segundo: Que por otro lado, en una revisión formal de los antecedentes, corresponde excluir también a **Francisco Giovanni Venegas**, con causa seguida ante Juzgado de Garantía de Puente Alto, por cuanto con anterioridad se interpuso en su favor un recurso de amparo en contra de la resolución que mantuvo su internación provisional en el CDP Santiago Uno, sin contar con informe psiquiátrico, el que fue conocido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en ingreso Rol N° 181-2024, tribunal competente que rechazó la acción por sentencia de 22 de marzo de 2024, la que fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 8 de abril de 2024.

En cuanto a **José Matías Lizama Vásquez**, tampoco será considerado en este fallo por cuanto, en la causa seguida ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 11543-2023, y en forma previa a la vista de estas acciones constitucionales, el recurso de amparo interpuesto en su favor ante esta Corte, Rol N° 498-2024, en contra de la resolución de 13 de febrero pasado que resolvió mantener la medida de internación provisional, fue conocido por una de las salas de esta Corte, encontrándose en acuerdo, resultando improcedente revisar nuevamente su situación procesal por esta vía, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone “*Cada sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce*”.



Otra situación particular que lleva igualmente a omitir pronunciamiento sobre el fondo, es la que afecta a **Daniel Edmundo Fernández Pradena**, según causa seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 1265-2023, respecto de quien se decretó internación provisional el 28 de septiembre de 2023 y la realización de un peritaje psiquiátrico, ordenando el Tribunal su traslado al ASA de Gendarmería de Chile. En audiencia de revisión de cautelares de 25 de marzo de 2024, se dejó sin efecto dicha medida sustituyéndola por otras del artículo 155 del Código Procesal Penal – arresto domiciliario total y arraigo nacional-; apelada esa decisión una de las Salas de esta Corte, por resolución de 27 de marzo pasado, la revocó y mantuvo la internación provisional, es decir este tribunal emitió pronunciamiento a su respecto. Consta de autos que se mantiene la hora agendada para peritaje psiquiátrico fijada para el día 23 de julio de 2024, como lo informa el Instituto Psiquiátrico.

Cuadragésimo tercero: Que, conforme a lo razonado, este tribunal carece de competencia para revisar el régimen cautelar que afecta a los siguientes imputados, por cuanto la resolución que dispone su internación provisional emana de Tribunales de Garantía pertenecientes a otras jurisdicciones:

I.- Juzgado de Garantía de Puente Alto.

1. Pablo Andrés Vega Cárdenas, causa RIT 1346-2023.
2. Ramón Segundo Rodríguez Alarcón, causa RIT 1879-2023.
3. Alfredo Arnoldo Urrutia Díaz, causa RIT 10602-2023.
4. Alexis Méndez Méndez, causa RIT 144-2024.

II.- Juzgado de Garantía de Melipilla.

5. Camilo Andrés Gamboa Contreras, causa RIT 3281-2023
6. Sergio Domingo Ahumada Valdenegro, causa RIT 565-2023
7. Paul Brayan Alarcón Curallán, causa RIT 3525-2023
8. Rodrigo Eduardo Pizarro Armijo, causa RIT 1367-2023
9. Raúl Patricio Morrison Ibañez, causa RIT 2223-2023

III.- Juzgado de Garantía de San Antonio.

10. Joel Armando Martínez Borne, causa RIT 7567-2022

IV.- Juzgado de Garantía de Talagante.

11. Alex Aaron Valenzuela Fuentes, causa RIT 1314-23
12. Eduardo Alejandro Pérez Armijo, causa RIT 5304-2022



V.- Juzgado de Garantía de Curacaví:

13. Brandon Esteban Gallardo Alborno, causa RIT 1278-2023

14. Gerson Arriagada Riquelme, causa RIT 21.2024

VI.- Juzgado de garantía de San Bernardo.

15. Giorgio Paolo Palavecino Ramos, causa RIT 6007-2022.

VI.- 11º Juzgado de Garantía.

16. Luciano Patricio Matamala Pérez, RIT 6845-2023

VII. 12º Juzgado de Garantía.

17. Juan Carlos Carrasco Madrid, RIT 804-23,

Por consiguiente, atendida la naturaleza de la acción de amparo y el objeto de la misma, careciendo este tribunal de competencia para revisar las resoluciones que afectan a estos imputados, así lo declarará en lo resolutive de este fallo.

Cuadragésimo Cuarto: Que, en cuanto a los tribunales de esta jurisdicción, no todos los amparados se encuentran en idéntica situación, por lo que para una mejor resolución del asunto, se harán las siguientes distinciones que emanan de los antecedentes reunidos en esta causa:

I.- Imputados respecto de los cuales se dejó sin efecto la medida de internación provisional o se ha modificado su situación procesal.

1. **Julio Vicente Velásquez**, 8º de Garantía de Santiago, RIT 6283-24, la Corte Suprema por sentencia de 25 de enero de 2024, Rol N° 1465-24, revocó la decisión de amparo de este tribunal, dejando sin efecto la medida de internación provisional decretada el 28 de noviembre de 2023, sustituyéndola por arresto domiciliario total, encontrándose en esa calidad desde el 26 de enero pasado.
2. **Héctor Francisco Parra Fuentes**, 1º de Garantía de Santiago, RIT 3868-2023. citado por el Hospital Horwitz Barak para evaluación a realizarse el 21 de marzo de 2024, el tribunal a solicitud de la defensa, dejó sin efecto la internación provisional el 22 de marzo pasado, coordinando un tratamiento de salud mental -en forma ambulatoria- en el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó.
3. **Benjamín Esteban Bordillo Catrimán**, 1º de Garantía de Santiago, RIT 3891-2023, en internación provisional desde el 18



de diciembre de 2023, recibido informe pericial que determina su plena imputabilidad, con diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial y juicio de realidad conservado, sin compromiso de la volición, elaborado el 12 de marzo de 2024, en audiencia del 20 de marzo pasado el tribunal decretó la reapertura del procedimiento sustituyendo la internación provisional por prisión preventiva.

4. **Faut Andrés Salas Seydewitz**, 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5707-2023, en internación provisional desde el 20 de julio de 2023; en audiencia de 25 de enero de 2024 el tribunal la sustituyó por arresto domiciliario total en la Unidad Terapéutica Creeré Chile, designándose como curador *ad litem* a un familiar del imputado.
5. **Patricio Andrés León Carrasco**, 3° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 1485-2023, se decretó internación provisional por resolución de 14 de julio de 2023 y recibido informe psiquiátrico con fecha 30 de noviembre de 2023, que concluye como diagnóstico trastorno de personalidad antisocial y trastorno por uso de sustancias psicoactivas y alcohol, el tribunal en audiencia de 10 de enero pasado, decreta la reapertura del procedimiento y sustituye la internación provisional por prisión preventiva.
6. **Joseú Baltazar González González**, 4° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 6387-2023, en internación provisional desde el 15 de noviembre de 2023, en audiencia del 9 de enero de 2024 se sustituye la medida de internación provisional, por la de arresto domiciliario total y se designa curador *ad litem* a un familiar; se encontraba en lista de espera para peritaje con el N° 97.
7. **Sebastián Nicolás Blasquez González**, 3° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5576-2022, se decretó Internación provisional por resolución de 10 de abril de 2023 y con el mérito del peritaje psiquiátrico recibido 1 de diciembre del mismo año, se dejó sin efecto la medida cautelar y se decretó prisión preventiva con fecha 19 del mismo mes y año.



8. **Alexis Jesús Caro Salazar**, 3° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5494-2023, se decretó Internación provisional el 29 de diciembre de 2023. Consta de la carpeta virtual que el Ministerio de Salud informó que el imputado no fue trasladado para evaluación agendada para el 9 de enero de 2024 y por ello tendría una eventual hora de atención en el Instituto Psiquiátrico para el 9 de mayo de esta anualidad. El tribunal en audiencia del día 12 de marzo pasado tiene presente el informe sobre la salud mental elaborado por el Gendarmería de Chile a solicitud del tribunal, que da cuenta de un trastorno por el abuso y consumo de drogas, discapacidad intelectual leve, psicosis exógena, trastorno de personalidad antisocial, esquizofrenia hebefrénica con varias internaciones en el Hospital Horwitz Barak, se escucha a la curadora –abuela- quien exhibe antecedentes médicos de la discapacidad mental del imputado, y con su mérito resuelve decretar la reapertura del procedimiento, dejar sin efecto la internación provisional sustituyéndola por arresto domiciliario total, comunicándose a su curador la hora agendada de evaluación en el Hospital Horwitz Barak.
9. **Andrés Ignacio Morales Jorquera**, 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 482-2022, se decretó Internación provisional el 28 de noviembre de 2023 y con el informe pericial elaborado por el Hospital Horwitz Barak, que concluyó que los diagnósticos no corresponden a una categoría de enajenación mental, se reanuda el procedimiento por resolución de 12 de febrero de 2024, y se decreta prisión preventiva.
10. **Gabriel Garrido Vargas**, 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2625-2023, se decretó Internación provisional el 8 de septiembre de 2023, y recibido el informe psiquiátrico realizado por el Hospital Horwitz Barak con fecha 10 de enero de 2024, el cual concluye que el imputado padece esquizofrenia paranoide defectual y trastorno de uso de sustancias psicotrópicas y epilepsia, lo que corresponde a una enajenación mental, no siendo peligroso en la medida que permanezca en tratamiento, el tribunal con fecha 24 de enero de 2024, decretó la reapertura del



procedimiento, alzó la medida de internación provisional, y decretó la del artículo 9° letra b) de la Ley N° 20.066.

11. **Luciano Patricio Matamala Pérez**, 11° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6845-2023, se decretó Internación provisional el 12 de diciembre de 2023, disponiendo –por falta de cupos- que se mantuviera en el CDP Santiago uno; el Hospital Horwitz Barak fija fecha de evaluación para el 25 de septiembre de 2024; en audiencia del 9 de enero de 2024 el tribunal la dejó sin efecto y decretó cautelar del artículo 155 letra d) del CPP, disponiendo su citación para la evaluación en septiembre.
12. **Isaac Guillermo Díaz Cantillana**, 13° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 4517-23, con fecha 4 de diciembre de 2023 se decretó la suspensión del procedimiento y la internación provisional del imputado. En audiencia de 11 de marzo de 2024 el tribunal dejó sin efecto esa cautelar y la sustituyó por arresto domiciliario total, mantiene su hora para evaluación en el Instituto psiquiátrico agendada para el 16 de mayo de 2024 y es atendido actualmente por el COSAM Peñalolén.
13. **Victor Hernán Peña Silva**, 13° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 473-23, con fecha 4 de diciembre de 2023 se decretó la suspensión del procedimiento y la internación provisional del imputado. En audiencia de 29 de febrero pasado, el Tribunal a solicitud de la defensa por la tardanza en el informe psiquiátrico, modifica el régimen cautelar y lo sustituye por arresto domiciliario total en la casa de acogida Cristo Puede, registra hora para la pericia pendiente el 27 de agosto de 2024.
14. **Mauricio González Mellado**, 5° Juzgado de Garantía de Santiago, con internación provisional decretada en recurso de Amparo Rol N° 1924-23, por sentencia de la Corte Suprema de 24 de agosto de 2023; el 2 de diciembre de 2023 se realizó informe de facultades mentales, diagnostico que corresponde a categoría de enajenación mental, siendo el imputado peligroso para si y para terceros. El 7 de febrero se decretó la reapertura del procedimiento y el imputado fue trasladado a la UEPI del Hospital Horwitz el 16 de febrero de 2024.



II.- Imputados que se encuentran con informe pericial elaborado por el Hospital Horwitz Barak o están ya ingresados en esa institución.

1. **Roland Baudilio Caniullán Rubilar**, causa del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 745-2023, se decretó internación provisional por resolución de 20 de octubre de 2023 y se dispuso la internación en el Hospital Horwitz Barak, agregando el tribunal que en espera del cupo correspondiente se mantenga apartado en el CDP Santiago Uno. Se realizó el Informe pericial con fecha 22 de febrero de 2024 donde se indica como diagnóstico trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol y trastorno de personalidad antisocial, y que “los diagnósticos no corresponden a la categoría de enajenación mental”. El tribunal informa que se encuentra en espera de ser traslado a la UEPI del Instituto Psiquiátrico.
2. **Carlos Andrés Encina Peña**, causa del 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 3090-2023, se decretó internación provisional el 28 de octubre de 2023, se dispuso la internación en el Hospital Horwitz Barak y en espera de la plaza disponible se decretó su ingreso al CDP Santiago Uno Hospital ASA. Se realizó el Informe pericial el 3 de noviembre de 2023 con diagnósticos que corresponden a una categoría de enajenación mental, siendo peligroso para sí y para terceros; el 17 de enero de 2024 se decreta la reapertura del procedimiento, se mantiene en internación provisional y el 19 de febrero se informó por el Instituto Psiquiátrico que está en lista de espera con el N° 49 para ser trasladado al Hospital Horwitz Barak, manteniéndose en el Hospital ASA como medida de resguardo.
3. **Alex Jordano Jiménez Cerna**, con causa seguida 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 969-2023, se encuentra en Internación provisional por resolución de 24 de mayo de 2023, con informe pericial elaborado por el Hospital Horwitz Barak el 17 de enero de 2024, que concluye como *diagnóstico “Simulación. Trastorno por uso de sustancias psicoactivas y alcohol, trastorno de personalidad antisocial”*, agregando que *“no corresponden a la categoría de enajenación mental”*.



4. **Jeremías Andrés Veliz Pasten**, Juzgado de Garantía de Colina, RIT 3883-2022, se decretó internación provisional el 19 de julio de 2023, se realizó la evaluación psiquiátrica por parte del Hospital Horwitz el 30 de noviembre de 2023, con diagnóstico de Esquizofrenia Hebefreno-paranoide, patologías de enajenación mental, y trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, agregando que es un peligro para sí mismo y para terceros; el 15 de enero se decretó la reapertura del procedimiento y encuentra internado en el Hospital Horwitz desde el 22 de enero de 2024.
5. **Eduardo Andrés Namuncura Namuncura**, causa del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 4996-22-2023, se decretó internación provisional el 22 de noviembre de 2023. Gendarmería informa que fue trasladado al Hospital Horwitz el 24 de enero de 2024 por descompensación, se está a la espera de la Carpeta, según informó el Hospital. El tribunal el 6 de marzo oficia al Hospital Horwitz para que informe si realizó la evaluación.

III.- Imputados con hora agendada para elaborar el informe psiquiátrico.

1. **Mauricio de Souza Lima**, causa del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 9195-2, en internación provisoria desde el 20 de noviembre de 2023, con hora de evaluación para el 19 de abril de 2024, el tribunal dispuso que el imputado se mantenga en el ASA del Hospital Penitenciario de Gendarmería de Chile.
2. **Oscar Glenn Cortés Bravo**, 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 1835-23-2021, desde el 22 de junio de 2023 se encuentra en internación provisional, el tribunal ordenó su traslado al Hospital Horwitz y mientras se genera alguna plaza, dispuso su ingreso en prisión preventiva en el CDP Santiago Uno; según lo informado por el Instituto Hospital Psiquiátrico se encuentra citado para el 11 de septiembre de 2024.
3. **Michael Andrés Carvallo Cordero**, causa seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6864-2023, desde el 6 de diciembre de 2023, se encuentra suspendido el procedimiento y en internación provisional; revisada la medida en audiencia del 19 de diciembre pasado, el tribunal la sustituye por arresto parcial y



sujeción al Instituto Psiquiátrico; con fecha el 27 de diciembre pasado, esta Corte dispone que la internación provisional se debe cumplir en su domicilio, manteniendo el control en las dependencias del Hospital Horwitz Barak; se designó curador *ad litem* y quedó citado para la realización del informe psiquiátrico el 19 de junio de 2024.

IV.- Imputados en lista de espera para evaluación psiquiátrica en Hospital Horwitz Barak.

1. **Francisco Javier Vargas Gutiérrez**, 4° Juzgado de Garantía e Santiago, RIT 6960-2023, desde el 27 de diciembre de 2023 se encuentra en internación provisional; segregado en la Unidad penal en Módulo 2 –ala acondicionada del Hospital penitenciario- en lista de espera con el número 35.
2. **Sergio Michel Jeldres Lagos**, 9° Juzgado de Garantía e Santiago, RIT 7812- 2023, desde el 27 de noviembre de 2023 se encuentra en internación provional, el tribunal ordenó su internación en el Hospital Horwitz Barak y según lo informado por Oficio de 23 de diciembre se encuentra en lista de espera con el número 110.
3. **Luis Roberto Aguilar Garrido**, 2° Juzgado de Garantía e Santiago, RIT 2573-2021, desde el 29 de noviembre de 2023 se encuentra en internación provisional, el tribunal ordenó su internación en UEPI del Hospital Horwitz Barak y mientras se genera el cupo respectivo, dispuso su ingreso en el CDP Santiago Uno, y según lo informado se encuentra en lista de espera con el número 109.
4. **Nelson Jeremías Muñoz Fuentes**, 14° Juzgado de Garantía de Santiago, en internación provisional desde el 4 de mayo de 2022, se ordenó el traslado a dependencia ASA de Gendarmería de Chile, se ordenó su ingreso al Hospital Horwitz Barak, el 22 de mayo de 2022 se designa curador en un familiar, el 19 de octubre de 2022 se informa que está en lista de espera N° 21 para ser evaluado: por lo anterior se solicita hora para peritaje al IML y aún se encuentra en lista de espera en esa institución con el N° 2.



5. **Francisco Daniel Morales Morales**, 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 7063-23, el 23 de diciembre de 2023 se decretó internación provisional, ordenando internación en el Hospital Horwitz Barak y de no existir plaza, se ordenó su permanencia en el Hospital ASA del CDP Santiago Uno, se realiza audiencia de cautela de garantía y el 3 de abril pasado se oficia a Gendarmería de Chile para el cumplimiento de lo decretado, en revisión del día 10 de abril, se mantiene la medida cautelar, informando Gendarmería que se encuentra en Santiago Uno, Módulo 16. No se ha recibido respuesta de fecha para peritaje psiquiátrico.
6. **Andrés Palomino Ibáñez**, 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5180-23, desde el 15 de noviembre de 2023 se encuentra en internación provisional, el tribunal ordenó su ingreso al Hospital Horwitz Barak, y por falta de plaza, se mantiene en el ASA de CDP Santiago Uno; el 2 de enero de 2024 se resolvió cumplir con su traslado al Hospital ASA Penitenciario y según lo informado por Oficio de 5 de abril pasado se encuentra en lista de espera con el número 29 y citado para el 28 de mayo de 2024.

Cuadragésimo quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 21 de la Constitución Política, todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Agrega el inciso segundo que esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención y que instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.



Finalmente, el inciso tercero señala que el mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuadragésimo sexto: Que de lo informado consta que la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 de Código Procesal Penal, se decretó por estimar los juzgadores que existían elementos para sospechar la peligrosidad de los imputados, decisión que en algunos procesos se adoptó incluso en audiencia de control de la detención, es decir con escasos antecedentes y, en otros, en audiencia posterior considerando los documentos hechos valer por la defensa, pero en todos los casos, se impuso esa medida cautelar personal sin contar con el informe psiquiátrico elaborado por un centro de salud especializado. En efecto, suspendido el procedimiento, los tribunales disponen derechamente la internación provisional y, además, resuelven que frente a la demora en la elaboración del informe pericial, el imputado debe mantenerse en dependencias de Gendarmería de Chile, derivándolos al CDP Santiago Uno o al CDP Santiago Sur, para ser ingresados al Hospital Penitenciario o a la Unidad de Atención de Salud Ambulatoria, sin que exista certeza de la peligrosidad del imputado y de su real situación de salud, determinando que esa institución asuma el resguardo de personas respecto de las cuales el procedimiento penal se encuentra suspendido.

La normativa legal exige una evaluación psiquiátrica y los tribunales disponen que la elabore -por regla general- el Instituto Psiquiátrico Dr. José José Horwitz Barak, evaluación que debe pronunciarse sobre la imputabilidad y peligrosidad actual para sí o para tercero de los imputados. Lo relevante en la materia es que solo con su mérito el tribunal estará en condiciones de definir la proporcionalidad de la medida cautelar procedente y resolver si es dable continuar o no con la tramitación del procedimiento, conforme a la normativa especial para el caso de sujetos mentales a quienes se le impute un delito, previsto en el Libro IV, del Título VII del Código Procesal Penal, esto es, para la aplicación de eventuales medidas de



seguridad. En el caso de la especie, de todas las causas revisados solo en relación a Reidin Castañeda Marchant, se ha dictado por el 7° Tribunal Oral en lo Penal sentencia definitiva con fecha 15 de abril de 2024, imponiendo medida de seguridad

En esta materia, dentro del procedimiento especial, el legislador incorporó como medida cautelar personal la denominada “internación provisional” que regula el artículo 464 del citado texto legal, que consiste en la internación del imputado en un establecimiento asistencial durante el procedimiento cuando éste padece algún trastorno mental grave -por ser un peligro para sí mismo o para terceros-, medida de carácter excepcional, por lo que al tiempo en que se decreta se deben cumplir los requisitos generales de la imputación penal, y el especial previsto en el artículo 464, que consiste en el informe pericial psiquiátrico que determine si padece el imputado una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que hicieran temer que atentará contra su vida y la de otras personas.

En el ámbito de aplicación de tal normativa, el artículo 464 del citado texto legal, prevé que *“el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial, cuando concurrieren los requisitos señalados en los artículos 140 y 141, y el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas”*.

Cuadragésimo séptimo: Que este tribunal no desconoce la realidad que deben enfrentar los Jueces de Garantía en el caso concreto a resolver, sino afirmar que la medida de internación provisional es una cautelar personal especial de gran intensidad, expresamente normada en la legislación vigente, cuyos requisitos no deben ser superados por las distintas prácticas judiciales, como se observa de los antecedentes de esta causa, por cuanto con ello se afecta la certeza jurídica, la garantía del debido proceso, los derechos de las personas con patologías psiquiátricas y las competencias de otros órganos del Estado.

También es relevante mencionar que de parte de los establecimientos de salud mental -Instituto Dr. José Horwitz Barak y Servicio Médico Legal- se observa demora en la elaboración de los peritajes requeridos, sin que corresponda a este Tribunal resolver sobre la organización de los distintos



centros de salud especializados, por cuanto dependen de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando los procedimientos penales se encuentran suspendidos y los imputados sometidos a un régimen cautelar que se cumple al margen de la legalidad, las obligaciones asumidas por el Estado en reguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, además, con problemas de salud mental, obligan a demandar una mejor gestión en la solución de tales conflictos, lo que involucra también al Poder Judicial para coordinar los esfuerzos a fin de dar una repuestas eficaz y oportuna.

A lo anterior se suma que de los informes de esta causa se observa que Gendarmería de Chile ha incumplido su obligación de trasladar a los imputados en las fechas fijadas previamente para la elaboración del peritaje psiquiátrico agendado -causas RIT 5494-23 del 3° Juzgado de Garantía y RIT 6864-23 del 4° Juzgado de Garantía- lo que agravaba aún más la condición de los imputados y revela falta de coordinación con los Tribunales y los establecimientos de salud mental.

Cuadragésimo octavo: Que de los antecedentes reunidos en esta causa, se infiere igualmente que los tribunales de la jurisdicción, enfrentados a la realidad de falta de plazas y horas disponibles para realizar el respectivo peritaje, pese a la reiteración de solicitudes en tal sentido, han modificado el régimen cautelar, disponiendo otras medidas de menor intensidad.

Por otro lado, se observa también que, a esta fecha, el informe psiquiátrico requerido, en las condiciones anotadas, fue ya elaborado por el Hospital Horwitz Barak y remitido al Tribunal de Garantía competente; en otros casos el establecimiento sanitario tiene agendadas horas para su realización en los meses próximos o simplemente -en un mayor número- los imputados aún con internación provisional vigente, se encuentran en lista de espera y, por ende, privados de libertad en recintos de Gendarmería de Chile..

Lo anterior, permite afirmar que aun cuando la internación provisional se decretó sin contar el tribunal con el informe pericial obligatorio que dispone la ley, estas evaluaciones no han sido ejecutadas en un plazo razonable, por falta de recursos o disponibilidad de plazas para su elaboración, como se explica en los diferentes oficios agregados a las causas.



El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwit Barak insiste en la falta de camas en la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI), sin embargo, se trata de una situación que se arrastra por largos años, y lo mismo acontece con el Servicio Médico Legal, pues de los informes se constata la existencia de listas de esperas en todas las Unidades Psiquiátricas del país, resultando entonces que los procesos de los amparados quedan suspendidos por largo tiempo, por defectos en la estructura de los organismos públicos llamados a realizar el informe de salud mental y peligrosidad.

Cuadragésimo noveno: Que conforme se viene razonado, en el sistema procesal penal existen situaciones excepcionales en que no cabe un reproche de culpabilidad contra una persona que comete un delito; sin embargo, igualmente quedan sujetos a formas distintas de intervención estatal, como son en este caso las normas del artículo 458 y siguientes del Código Procesal Penal, relativas a la situación de los enajenados mentales.

Por consiguiente, tratándose la internación provisional de una medida que se funda en la peligrosidad del imputado -diagnosticada por un especialista, sea para sí o para terceros- resulta indispensable que en forma previa se acredite pericialmente tal condición y mientras ello no acontezca no se verifica entonces el antecedente objetivo que autoriza al juzgador para adoptar dicha medida cautelar, como exigencia legal, y menos para así disponerla, por cuanto al obrar en esos términos se mantiene a los imputados privados de libertad en recinto comunes de Gendarmería de Chile, donde el derecho a la salud no puede ser garantizado y menos atendido correctamente.

El procedimiento especial que se viene comentando se inicia con una sospecha de enajenación mental y el juez de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, suspende el procedimiento -como se observa en las causas de los amparados- para la realización del informe pericial que confirme dicho estado y se pronuncie, además, sobre el nivel de peligrosidad. Con ello se busca determinar si el imputado tiene la calidad de inimputable y, por ende, exento de responsabilidad penal, lo cual a vez permite al tribunal establecer la necesidad de cautela que resulte proporcional al caso investigado; a su vez el tribunal debe -aun sin el informe pericial- designar un curador *ad litem* para ejercer los derechos del imputado.



El legislador exige razones de proporcionalidad que justifiquen la necesidad de esa excepcional medida privativa de libertad, lo que ha sido desoído por los tribunales.

Por otro lado, tampoco se desconoce que algunos recintos penitenciarios cuentan con Unidades de Salud en su interior, que pueden ser de gran utilidad y eficacia, pero ellas están destinadas a la atención de la población penal en general y la ley en el procedimiento especial referido, no las contempla como centros aptos para la internación provisional, la que debe llevarse a cabo -una vez establecida la patología mental y el grado de peligrosidad del imputado- en establecimientos médicos psiquiátricos de la red pública de salud.

En cuanto al recurso de amparo ingresado por el Instituto de Derechos Humanos, este tribunal no puede dejar de advertir, sin perjuicio de lo que se dirá en lo resolutivo de este fallo, que éste parte de una premisa errada, cual es, que todos los amparados cuentan con informe pericial psiquiátrico sobre su inimputabilidad y nivel de peligrosidad para sí y para terceros, lo que como se observa de los antecedentes de esta causa, ello no es así.

Quincuagésimo: Que sobre los que se viene razonando, la Corte Suprema ha señalado que *“la medida de internación provisional, según prescribe el artículo 464 del Código Procesal Penal, puede decretarse cuando el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas”* y que *“de la cita efectuada queda en evidencia que, en el caso de autos, no resultaba procedente dictar tal medida cautelar, desde que no se cumplían las condiciones legales para ello, al no haber sido aún evacuado el informe psiquiátrico de rigor”*, agregando que *“...sin perjuicio de lo anterior, el precepto en análisis, en su inciso segundo, hace aplicables las reglas de los párrafos 4°, 5° y 6° del Título V del Libro I en este especial procedimiento en aquello que fuere pertinente. De esta manera, es factible imponer las medidas cautelares del artículo 155 si el caso lo amerita”*. (Fallo dictado en la causa Rol N° 11359, de 20 de agosto de 2015).

También ha resuelto el máximo tribunal que *“el amparado no ha sido traslado a un centro hospitalario que reúna las condiciones necesarias para cumplir con la medida cautelar decretada a su respecto, manteniéndose en*



el penal de la ciudad de Valparaíso, lo que evidentemente constituye una afectación a su seguridad individual que debe ser subsanada". (Sentencia Rol N° 104.754-23, de fecha 2 de junio de 2023).

En el contexto descrito, es un hecho de la causa que los imputados en favor de quienes se recurre -cuya situación mental no ha sido aún aclarada- se mantienen en una unidad penitenciario común desde hace larga data, sin ser oídas las explicaciones dadas en diversas audiencias por su defensa, lo que infringe lo previsto en el artículo 464 del Código Procesal Penal, desde que no se advierte que los imputados estén en situación de ser trasladados a un centro especializado de salud mental, por falta del informe de peligrosidad que se encuentra pendiente, afectando con ello el derecho constitucional que se denuncia, por cuanto la privación de libertad en estos casos se torna excesiva y desproporcionada, pues no existe fundamento cierto que la justifique, más allá de las sospechas que en su oportunidad pudo inferir el juzgador.

Quincuagésimo primero: Que si bien no se satisface el presupuesto objetivo para decretar la internación provisional, se trata de personas formalizadas por diferentes delitos y frente a la demora en elaborar el informe pericial requerido -Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en la mayoría de las causas- se hace necesario que los tribunales revisen la situación procesal de cada uno de los imputados a fin de definir si en el caso concreto, estos pueden ser objeto de alguna otra medida cautelar personal, pues así lo reconoce el artículo 464 inciso segundo del mencionado Código, que hace aplicable a este procedimiento especial las reglas de los párrafos 4, 5 y 6 del Título V del Libro I, en lo que fuere pertinente.

Quincuagésimo segundo: Que corresponde al Estado garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que se encuentra el derecho a la salud física y mental, lo que en este caso se incumple por cuanto se mantiene a los amparados sujetos a la medida cautelar de internación provisional en recintos penitenciarios, unidades que, de existir una patología mental grave, no cuentan con las capacidades para atenderlos adecuadamente. Además, los tribunales decretaron la suspensión del procedimiento en espera de un informe que el Estado no está en condiciones de entregar en un plazo razonable, infringiéndose así las reglas de procedimiento previstas en los artículos 458 y 464 el citado texto legal.



La situación que se revisa vulnera, además, la norma del artículo 82.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en cuando dispone que los reclusos alienados y enfermos mentales no deben ser reclusos en prisiones y que deberá ser observados y tratados en instituciones especializadas.

Quincuagésimo tercero: Que se cumplen en el caso de autos los presupuestos del artículo 140 del texto legal mencionado, razón por la cual, sin perjuicio del estado procesal de las causas, y en todos los casos en que aún no se cuente con el informe pericial psiquiátrico, resulta necesario dar protección a las víctimas y asegurar los fines del procedimiento, por lo que se acogerá lo pedido por vía subsidiaria en los amparos Roles N° 638-24, 652-24 y 682-24, en orden a decretar la realización de audiencias para debatir la posibilidad de imponer otras medidas cautelares del artículo 155 del Código procesal Penal, si conforme al mérito del proceso ellas resultan adecuadas y proporcionales a los hechos indagados, para lo cual se hará agregar un informe sobre la salud mental actual de los amparados, elaborado por los profesionales de las Unidades en las que se encuentran privados de libertad, debiendo citarse a los curadores *ad litem* designados.

Quincuagésimo cuarto: Que sin perjuicio de lo anterior se observan situaciones particulares que es necesario abordar por separado. En relación al imputado **Roland Baudilio Caniullán Rubilar**, 6° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 745-23, por resolución de 20 de octubre de 2023, se decretó la suspensión del procedimiento de conformidad al artículo 458 del Código Procesal Penal, se modificó el régimen cautelar imponiendo al imputado la medida de internación provisional, decretando además el informe pericial de rigor y su traslado al CDP Santiago Uno.

Consta de autos, que el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak elaboró dicho informe el 22 de febrero de 2024, rectificado el 8 de marzo pasado, concluyendo como diagnósticos: *“Trastorno por consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol y trastorno de personalidad antisocial”*, agregando que *“los diagnósticos antes mencionados no corresponden a la categoría de enajenación mental. El Sr. Caniullán Rubilar es capaz de diferenciar un acto ilícito de uno lícito, así como de autodeterminar su conducta conforme a derecho, por lo tanto, su responsabilidad en los hechos investigados no se encuentra comprometida”*, Con esta información el



tribunal de la causa nada decretó para efectos de revisar la medida cautelar personal que afecta al imputado, ni para reanudar la tramitación del procedimiento, afirmando en el informe de este recurso, algo que no se refleja en la carpeta electrónica de tramitación, por cuanto únicamente dispuso con fecha 11 de marzo de 2024 *“téngase presente lo informado, póngase en conocimiento de los intervinientes para los fines que fueren pertinentes y notifíqueseles la presente resolución por correo electrónico”*. Además, es evidente que el imputado no se encuentra en lista de espera, pues su situación de salud mental fue ya diagnosticada; no padece una enfermedad mental grave ni es un peligro para sí ni para terceros, por lo que corresponde reanudar el procedimiento y modificar el régimen cautelar.

El imputado **Alex Jordano Jiménez Cerna**, con causa seguida 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 969-2023, se encuentra en Internación provisional por resolución de 24 de mayo de 2023, disponiendo el tribunal -por falta de plazas en el Instituto Psiquiátrico- que el imputado se mantuviera en el CDP Santiago Uno, pero recibido el informe pericial médico forense elaborado por el Hospital Horwitz Barak el 17 de enero de 2024, que concluye como *diagnóstico “Simulación. Trastorno por uso de sustancias psicoactivas y alcohol, trastorno de personalidad antisocial”*, agregando que *“no corresponden a la categoría de enajenación mental”*, se decreta ampliación de informe el que se recibe el 23 de febrero pasado, con igual diagnóstico, lo que se puso en conocimiento de la defensa, citando a una audiencia para el día 18 de marzo de 2024 y, del acta agregada a la causa, solo consta que el imputado se *“encuentra en el módulo 31 de Santiago Uno y no desea ser cambiado”*. De lo consignado resulta que el tribunal no se ha pronunciado como en derecho corresponde sobre el mérito del informe pericial, debiendo decidir sobre la reapertura del procedimiento y el régimen cautelar el imputado.

Distinta es la situación de **Carlos Andrés Encina Peña**, con causa ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 3090-23, acumulada a la RIT 1634-2022, en internación provisional por resolución de 28 de octubre de 2023, fecha en la cual el tribunal suspendió el procedimiento, decretando además el ingreso del imputado al CDP Santiago Uno, Hospital ASA, mientras no se libere una plaza en el Instituto Psiquiátrico.



El tribunal informa que con fecha 03 de noviembre de 2023 se recibe informe sobre facultades mentales del imputado en el que se concluye que padece *“una discapacidad intelectual moderada, un trastorno neurocognitivo mayor debido a etiologías múltiples, con alteración del comportamiento, epilepsia y trastorno por uso de sustancias psicoactivas, todo lo cual corresponde a la categoría de enajenación mental, por lo que el imputado no es capaz de diferenciar una conducta lícita de una ilícita ni de autodeterminar su conducta conforme a derecho, siendo peligroso para sí y para terceros en la medida que no mantenga tratamiento psiquiátrico a permanencia ni abstinencia de consumo de sustancias psicoactivas”* Con fecha 15 de noviembre de 2023 y a petición de la defensa, se ofició al Hospital Horwitz *“a fin de verificar la posibilidad de priorizar el traslado del imputado, quien se encontraría descompensado, convirtiéndose en un riesgo para él como para los demás internos”*, petición respecto de la cual no hubo respuesta.

Con fecha 17 de enero de 2024 el Tribunal decretó la reapertura del procedimiento, ordenándose, nuevamente, que el imputado fuese trasladado a la brevedad al Hospital Horwitz, ante lo cual dicho recinto asistencial informó el 22 de enero de 2024 que el imputado se encuentra en el N° 56 de la lista de espera. Con fecha 15 de febrero de 2024 el tribunal revisó nuevamente la internación provisional del imputado, la que mantuvo, ordenando oficiar al Hospital Horwitz Barak para que dentro de tercero día procediera a la apertura de un cupo para el encausado, informando dicho centro de salud, con fecha 19 de febrero del año, que el imputado se encuentra en el N° 49 de la lista de espera.

En este caso, corresponde que el Instituto Psiquiátrico arbitre las medidas para dar cumplimiento a la internación provisional, pues ya conoce la situación de salud del amparado y con su actuar afecta los derechos del imputado y vulnera lo previsto en el artículo 464 del Código Procesal Penal, por cuanto el imputado permanece privado de libertad en una Unidad de Gendarmería, la que no cuenta con las capacidades médicas y técnicas para darle protección.

En lo atinente a **Jeremías Andrés Veliz Pasten**, Juzgado de Garantía de Colina, RIT 3883-2022, se encuentra en internación provisional desde el 19 de julio de 2023, pero habiéndose realizado la evaluación psiquiátrica con fecha 30 de noviembre pasado, con diagnóstico de Esquizofrenia Hebefreno-



Paranoide, patologías de enajenación mental, y trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, concluyendo el peritaje que es un peligro para sí mismo y para terceros; el tribunal decretó por resolución de 15 de enero la reapertura del procedimiento y se encuentra actualmente internado en el Hospital Horwitz desde el 22 de enero de 2024, motivo por el cual no existe ahora medida que adoptar en su favor.

Por su parte, el imputado **Eduardo Andrés Namuncura Namuncura**, con causa en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 4996-2022, según lo informado por el tribunal, por razones de descompensación grave se encuentra actualmente ingresado en el Instituto Psiquiátrico desde el 24 de enero pasado. Sin embargo, el procedimiento se mantiene suspendido, y su situación procesal sin definir, pues no se cuenta con el informe pericial necesario que determine su patología mental y riesgo de peligrosidad. Por consiguiente, dicho servicio deberá elaborar a la brevedad el informe requerido, pues se trata de una situación que debe ser esclarecida conforme a la normativa vigente a fin de continuar con el procedimiento en los términos que autoriza la ley, resguardando los derechos del imputado.

Finalmente, se dirá que **Reidin León Castaneda Marchant**, en internación provisional decretada por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 2282-22, fue sentenciado por el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, RIT 299-2023, con fecha 15 de abril de 2024, y se le impuso la medida de seguridad consistente en su internación en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak por el término de 10 años y un día, en razón de haberse acreditado su participación en el delito de homicidio, más quinientos cuarenta y un día por los delitos lesiones graves en la persona de Erik Rain y de José Maldonado; razón por la cual el recurso será rechazado.

Quincuagésimo quinto: Que conforme lo razonado en el motivo Cuadragésimo tercero de este fallo, este tribunal es incompetente para pronunciarse sobre la situación procesal de esos amparados, por las razones ahí expresadas. Por otro lado, habiéndose dejado sin efecto la internación provisional respecto de los imputados individualizados en el considerado Cuadragésimo cuatro de esta decisión, no existe a esta data medida alguna que adoptar a su favor, pues ya no se encuentran privados de libertad recintos de Gendarmería de Chile, sin perjuicio de lo reflexionado acerca de



la interpretación de las normas de los artículos 458 y 464 del Código Procesal Penal.

Finalmente, en cuanto a los restantes amparados, constatadas las ilegalidades anotadas previamente, que afectan los derechos y garantías fundamentales denunciadas, las acciones de amparo serán acogidas en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 19 N° 7 y 21 de la Constitución Política de la República, **se resuelve:**

I.-Que esta Corte es incompetente para pronunciarse sobre la situación de los amparados cuya internación provisional fue decretada por tribunales de otra jurisdicción, por los que se dispone remitir copia de las piezas pertinentes a las Corte de Apelaciones de San Miguel y Valparaíso para su conocimiento y resolución, esto es, respecto de los siguientes imputados:

A .- Juzgado de Garantía de Puente Alto.

1. Pablo Andrés Vega Cárdenas, causa RIT 1346-2023.
2. Ramón Segundo Rodríguez Alarcón, causa RIT 1879-2023.
3. Alfredo Arnoldo Urrutia Díaz, causa RIT 10602-2023.
4. Alexis Méndez Méndez, causa RIT 144-2024.

B. - Juzgado de Garantía de Melipilla.

5. Camilo Andrés Gamboa Contreras, causa RIT 3281-2023
6. Sergio Domingo Ahumada Valdenegro, causa RIT 565-2023
7. Paul Brayan Alarcón Curallán, causa RIT 3525-2023
8. Rodrigo Eduardo Pizarro Armijo, causa RIT 1367-2023
9. Raúl Patricio Morrison Ibáñez, causa RIT 2223-2023

C.- Juzgado de Garantía de San Antonio.

10. Joel Armando Martínez Borne, causa RIT 7567-2022

D.- Juzgado de Garantía de Talagante.

11. Alex Aaron Valenzuela Fuentes, causa RIT 1314-23
12. Eduardo Alejandro Pérez Armijo, causa RIT 5304-2022

E.- Juzgado de Garantía de Curacaví.

13. Brandon esteban Gallardo Alborno, causa RIT 1278-2023
14. Gerson Arriagada Riquelme, causa RIT 21.2024

F.- 11° Juzgado de Garantía



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXLXNSNPB

15. Luciano Patricio Matamala Pérez, RIT 6845-2023

G.- 12° Juzgado de Garantía.

16. Juan Jesús Carrasco Madrid, RIT 804-23

II.- Que se **rechaza** los recursos en relación a los amparados **Francisco Giovanni Venegas, José Matías Lizama Vásquez y José Matías Lizama Vásquez, por lo razonado en el motivo Cuadragésimo segundo de este fallo**, también se rechazan respecto de los **imputados que actualmente no se encuentran en internación provisional** que se individualizan en el motivo Cuadragésimo cuarto numeral I, de este fallo; en relación a **Reidin León Castaneda Marchant**, se desestiman por haberse dictado sentencia definitiva con fecha 15 de abril pasado y en cuanto a **Jeremías Andrés Veliz Pasten**, Juzgado de Garantía de Colina, RIT 3883-2022, por encontrarse en internación provisional en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.

III.- Que en cuanto a los imputados **Roland Baudilio Caniullán Rubilar**, con causa seguida ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 745-23, **Alex Jordano Jiménez Caro**, RIT 969-23 del 5° Juzgado de Garantía y **Carlos Andrés Encina Peña**, con causa ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 3090-23, se **acogen los recursos de amparos y se dispone**, en relación a los dos primero, que el tribunal cite, a la brevedad, a una audiencia para definir la situación procesal de los amparados, teniendo para ello presente los informes psiquiátricos acompañados a la causa. En relación al tercero, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, deberá en el plazo de 10 días corridos recibir al amparado Encina Peña para que cumpla en ese Centro asistencial la medida de internación provisional ya decretada.

Asimismo, respecto del amparado **Eduardo Andrés Namuncura Namuncura**, con causa en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 4996-2022, se acogen las acciones intentadas para que el citado Instituto Psiquiátrico elabore, en el plazo de 20 días corridos, el informe pericial requerido.

IV.- Que en cuanto a los imputados **Michael Andrés Carvallo Cordero**, causa seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6864-2023, **Mauricio de Souza Lima**, causa del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 9195-2, **Oscar Glenn Cortés Bravo**, 5° Juzgado de Garantía



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXLXNSENPB

de Santiago, RIT 1835-23-2021, **Francisco Javier Vargas Gutiérrez**, 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6960-2023, **Sergio Michel Jeldres Lagos**, 9° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 7812- 2023, **Luis Roberto Aguilar Garrido**, 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2573-2021, **Nelson Jeremías Muñoz Fuentes**, 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6273-2021, **Francisco Morales Morales**, 14° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 7063-23, y **Andrés Palomino Ibáñez**, 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5180-23, se **acogen los recursos de amparo** para que el tribunal competente, a la brevedad, **se pronuncie sobre la procedencia de otras medidas cautelares** en su favor, debiendo el Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda citar a los intervinientes y al curador *ad litem* designado, considerando el estado de salud actual de los imputados, para lo cual requerirá previamente informe a Gendarmería de Chile sobre su estado de salud, sin perjuicio de otras medidas que el tribunal de primer grado pueda decretar en la respectiva audiencia, si a esa fecha aún no cuenta con los informes periciales sobre la salud mental de los recurrentes y su peligrosidad.

V.- Advirtiéndole este tribunal que los Juzgados de Garantía de esta jurisdicción, no dan estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 458, 459 y 464 del Código Procesal Penal, afectando con ello los derechos de los imputados y al mismo tiempo las atribuciones de Gendarmería de Chile, y observando también demoras injustificadas por parte de los tribunales en resolver lo pertinente una vez recibidos los informes psiquiátricos requeridos, remítase copia de esta sentencia al Señor Presidente de esta Corte para los fines pertinentes, por tener injerencia en los antecedentes Administrativos Rol N° 1169-24 de este Tribunal.

VI. En cuanto a los establecimientos psiquiátricos -Instituto Dr. José Horwitz Barak y Servicio Médico Legal- que deben elaborar los informes periciales decretados por los tribunales, ofíciase al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin que se adopten las medidas pertinentes para dar respuesta oportuna a tales requerimientos.

VII. Asimismo, ofíciase a Gendarmería de Chile con el objeto de que cumplan en forma oportuna con los traslados de los imputados que tiene fecha y hora para su evaluación psiquiátrica en los centros especializados de



salud mental, debiendo efectuar las coordinaciones necesarias con ese objeto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Amparo-638-2024 (acumulados N° 649-2024, 652-2024, 682-2024 y 748-2024).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXLXNSNPB

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Inelie Duran M. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HFXLXNSNPB